dawnfeminist.org

MARZO 2022
ISSN 2413-1512

DAWN *Informa*

RETOS FEMINISTAS EN UN MUNDO DIGITAL

DAWN FEMINIST
MUJERES POR UN DESARROLLO ALTERNATIVO PARA UNA NUEVA ERA

DAWN Informa es la publicación periódica de DAWN, la cual muestra los últimos análisis de la organización, críticas y comentarios.

DAWN proporciona un marco analítico que ha cambiado los términos del debate sobre los problemas que afectan a las mujeres en todo el mundo. Su análisis continuo sobre las conexiones, crisis sistémicas de deuda, deterioro de los servicios sociales, degradación ambiental, inseguridad alimentaria, fundamentalismos religiosos, militarismos y el conservadurismo político, surge de las experiencias de las mujeres pobres que residen en los países del Sur económico.

DAWN Informa es un espacio para la libre circulación de estas ideas y se ha publicado desde la década de 1980.

DAWN
FEMINIST

MUJERES POR
UN DESARROLLO
ALTERNATIVO PARA
UNA NUEVA ERA

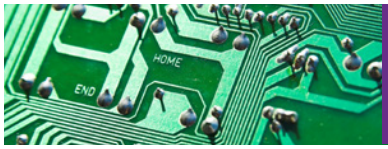
DAWN es una red de investigadoras y activistas feministas del Sur global que trabajan para alcanzar la justicia económica y de género y un desarrollo sostenible y democrático.

INDEX

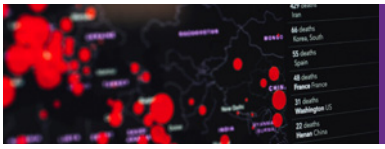
4 **Introducción**
por Flora Partenio y Sala Weleilakeba

9 **Un futuro feminista del trabajo en el momento post-pandémico**
por Anita Gurumurthy

14 **La paradoja del trabajo esencial durante la pandemia: El trabajo de plataforma en Argentina**
por Flora Partenio

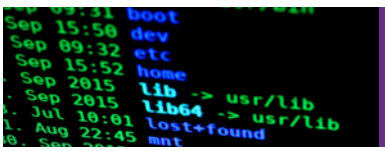


19 **La cuarta revolución industrial en Fiyi**
por Sala Weleilakeba



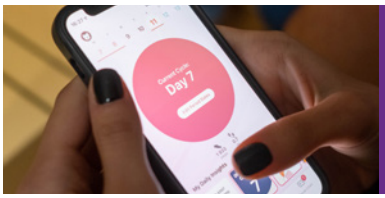
26 **La gubernamentalidad digital en Fiyi durante Covid-19**
por Damien Gock

31 **¿Puede la justicia digital cumplir con la justicia social? Lecciones de Kerala durante la pandemia**
por Vanita Nayak Mukherjee



38 **Gobernanza de datos e inteligencia artificial**
por Cecelia Alemany y Anita Gurumurthy

44 **Subvertir los sistemas de vigilancia israelíes: Una nota sobre la resistencia palestina**
por Kholoud Al-Ajarma



48 **Sujetos de datos en la matriz de Femtech: Un análisis de economía política feminista del mercado mundial de Menstruapps**
por Nandini Chami y R. Vaishno Bharati

53 **Pasaportes de vacunación: ¿Una situación complicada?**
por Sai Jyothirmai Racherla

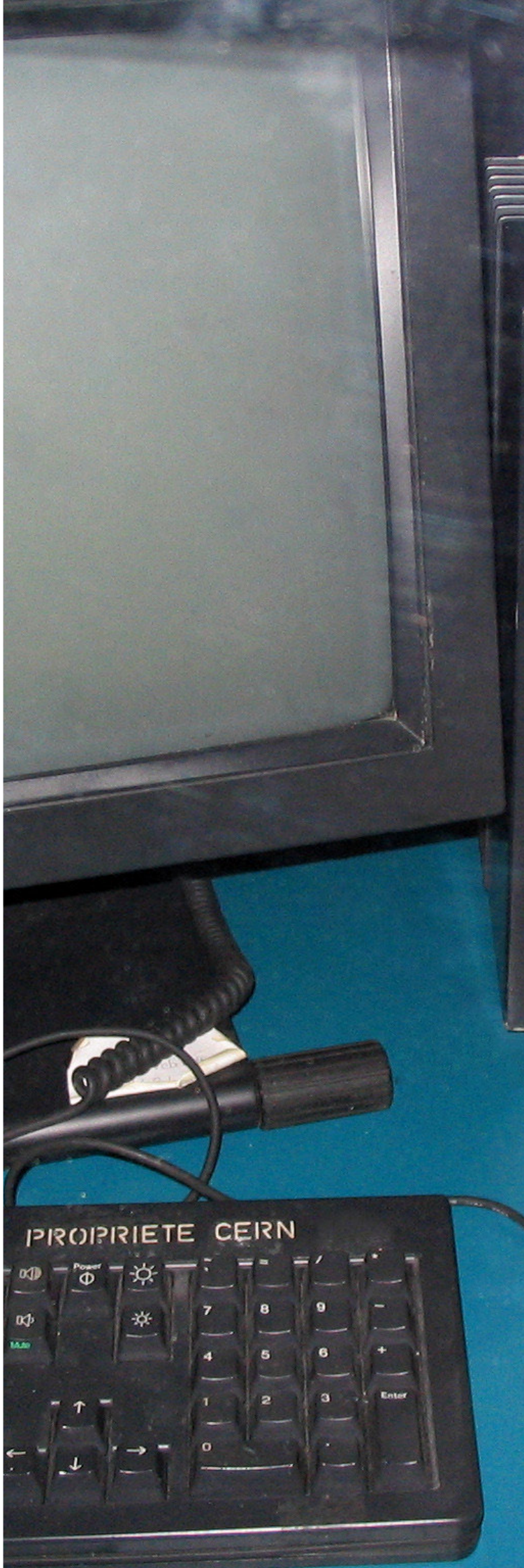
volver al índice →

INTRODUCCIÓN

RETOS FEMINISTAS EN UN MUNDO DIGITAL

por Flora Partenio y Sala Weleilakeba

Esta estación de trabajo NeXT (un NeXTcube, monitor Cern 57503) fue utilizada por Tim Berners-Lee como el primer servidor web de la la World Wide Web. Se muestra aquí tal y como se expuso en 2005 en el Microcosmos, el museo científico público del CERN donde Berners-Lee trabajaba en el año 1991. El documento sobre el teclado es una copia de "CERN DD/OC March 1989 Gestión de la Información: Una Propuesta. Abstract", que era la propuesta original de la propuesta original de Berners-Lee para la World Wide Web.



El mundo entró en la era digital con la creación de Internet en los años 60, pero no fue hasta la década de los 90 cuando el mundo en línea empezó a parecerse a lo que ahora conocemos como Internet. Cuando Tim Bernes-Lee lanzó su "World-Wide Web", popularizó Internet y la convirtió en un elemento básico de información y entretenimiento en la vida moderna *(Imagining the Internet n.d)*. Mientras que las computadoras eran el principal medio de acceso a Internet en los años 90 y principios de la década de 2000, la introducción y posterior omnipresencia del teléfono móvil inteligente provocó su auge, principalmente debido a su comodidad y portabilidad (Wilmer, Sherman y Chein, 2017). Ahora bien, ¿cómo hemos llegado a esta cuarta revolución industrial? Bajo esta "revolución" es posible rastrear el incremento de las tecnologías de la información y la comunicación, particularmente en las dinámicas productivas y laborales, donde se articulan procesos de robotización, digitalización y desarrollo de la Inteligencia Artificial en diferentes áreas y servicios. Las narrativas dominantes que alaban esta imparable transformación tecnológica destacan el dinamismo de la llamada "economía colaborativa" y el comercio digital. Sin embargo, estas narrativas evitan mostrar los riesgos que conlleva para los derechos laborales y el cumplimiento de la normativa fiscal.

La pandemia de COVID-19 ha acelerado aún más este proceso de expansión hacia la digitalización[1] y la virtualización[2]. Desde el inicio de la pandemia de Covid-19 en 2020, estamos viviendo profundas transformaciones en las dinámicas sociales, económicas y laborales. La creciente virtualización del trabajo, de las relaciones sociales y de los intercambios financieros y comerciales, ha llevado a miles de trabajadores a cumplir con sus tareas laborales a distancia desde sus casas. Durante los confinamientos, la movilidad de las personas fue controlada a través de aplicaciones gestionadas por los gobiernos. Los debates feministas sobre el "futuro del trabajo" comenzaron mucho antes de la pandemia (Scasserra y Partenio, 2020). Desde diferentes estudios, se advirtió que los empleos impulsados por la llamada "revolución 4.0" y la economía de plataformas contenían una serie de retos relacionados con la organización de los cuidados, los derechos laborales, la seguridad social y la protección social (ibid). En efecto, la revolución digital y de los datos ha puesto de manifiesto graves problemas para alcanzar una justicia de género, tales como la perpetuación de los patrones existentes de desigualdad de género y brechas. Estas condiciones se vieron agravadas con la pandemia.

Cuando hablamos de la "economía digital, nos referimos a la creciente reorganización de los intercambios de mercado por parte de las plataformas (...) Tal y como es hoy, la economía de plataforma es extractivista, explotadora y expeditiva" (Gurumurthy, 2020: p.1). La plataformización transforma la producción, la distribución y la reproducción social, de manera que refuerza la concentración del poder económico y social en manos de

las corporaciones y los países del Norte global (Gurumurthy, Chami y Alemany, 2018). Las relaciones económicas y la actividad comercial se están reorganizando con la expansión de las plataformas. En estos espacios, la contribución de las mujeres a la economía de las plataformas suele ser invisible. Esta economía emergente está reproduciendo las desigualdades sociales, ya que las empresas de plataformas han surgido como una fuerza dominante que controla las interacciones sociales y el mercado.

> *La estructura del capitalismo digital tiene sus raíces en la desigualdad extrema. La digitalización está en consonancia con la concentración del poder económico en manos de unos pocos, con la disminución de los rendimientos del trabajo en comparación con los del capital, y con el progreso limitado de la desigualdad de ingresos dentro de los países y entre ellos. Las mujeres se ven afectadas de forma desproporcionada por este aumento de la desigualdad y tienen más probabilidades de experimentar la pobreza extrema* (Gurumurthy y Chami, 2021: p.2).

El contexto de la pandemia ha intensificado estas desigualdades, ha ampliado la brecha digital y ha acelerado la exclusión digital de las mujeres, poniendo de manifiesto las disparidades socioeconómicas dentro de los países y entre ellos.

La revolución digital y de los datos ha suscitado así una serie de preocupaciones en torno a la justicia de género y los derechos humanos. ¿Cuáles son las respuestas del movimiento feminista? En los últimos 10 años, el mundo ha visto un aumento del activismo y el sentimiento feminista sobre estas preocupaciones. “Investigadores de la academia,

Foto | Pixabay de Pexels

activistas y periodistas han bautizado [la década] como la cuarta ola del feminismo" (Pruchniewska, 2019). Una característica de la cuarta ola es el uso de las tecnologías digitales y de Internet para el activismo y el debate feminista (ibid). Hoy en día, las tecnologías digitales están creando nuevas formas de acción política en todo el mundo; y el activismo feminista incluso sostiene que la interfaz entre lo online y lo offline está rehaciendo el feminismo, vinculando las interconexiones críticas entre lo local y lo global (Samuel, Partenio & Cai, 2022 p.1). En este sentido, cabe preguntarse cómo se cruza la agenda feminista con la de los derechos humanos en la economía digital. ¿Qué puntos de inflexión se han producido en el mundo del trabajo? ¿Qué aportes puede hacer el feminismo para (re)imaginar futuros posibles? ¿Qué retos plantea la transición a la fase post pandémica? ¿Es posible la justicia digital feminista?

El proyecto de colaboración de DAWN con IT for Change -Justicia Digital Feminista- pretende interpretar el emergente paradigma tecnosocial desde un punto de vista feminista del Sur. Este número de *DAWN Informa* desafía a las feministas del Sur a comprometerse con la economía política de los datos, a utilizar sus conocimientos y experiencias para criticar y replantear los debates, destacando las intersecciones entre la justicia de género, los derechos humanos y la frontera digital. Entre las autoras de los articulos reunidos aquí, se encuentran feministas que trabajan en la primera línea de la justicia digital feminista desde diversas experiencias, países y registros.

Exploramos aquí los retos de la expansión de un mundo digitalmente mediado en el contexto de la crisis de COVID-19. Los artículos de esta publicación muestran el impacto de la digitalización en los medios de vida y los derechos humanos de las mujeres en el Sur global. Abordamos los vínculos entre la digitalización y la inclusión digital, los derechos laborales en el marco de los nuevos modelos productivos en el escenario post pandémico, los pasaportes sanitarios y las vacunas, los cuerpos y el mercado global de las aplicaciones menstruales, la vigilancia de las poblaciones y la biopolítica en el contexto pandémico. Se plantean cuestiones cruciales sobre la soberanía de los datos, la seguridad digital, la privacidad y la protección de los datos. Exploramos la resistencia feminista y las estrategias colectivas para hacer frente a estos desafíos. Nuestro objetivo es comprender más profundamente, explorar, analizar, rastrear las pistas y abrir nuevas preguntas para seguir imaginando un futuro feminista dentro de un mundo cada vez más digital.

Referencias

Gurumurthy. A., (2020). *A Feminist Future of Work in the Post-Pandemic Moment: A New Social Contract as if Women Matter*. [pdf]

Gurumurthy, A., and Chami. N., (2021). *The Deal We Always Wanted: A Feminist Action Framework for the Digital Economy*. [pdf]

Gurumurthy, A., Chami. N., and Alemany, C., (2018). *Gender Equality in the Digital Economy: Emerging Issues: A New Social Contract for Women's Rights in the Data Economy.* [pdf]

'Imagining the Internet', (n.d). *Elon University,* visto el 30 de octubre de 2021. [online]
Pruchniewska, U. M., (2019). 'Everyday Feminism in the Digital Era: Gender, The Fourth Wave, and Social Media Affordances', PhD Thesis, Temple University, Philadelphia.

Scasserra, S., and Partenio, F., (2020) "Justicia digital" in *Asociación Argentina Para La Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género*, Boletín digital de la AAIHMEG, Año 4 – No. 1 – Marzo. [pdf]

Wilmer, H.H., Sherman, L. E. and Chein, J. M., (2017). 'Smartphones and Cognition: A Review of Research Exploring the Links between Mobile Technology Habits and Cognitive Functioning', *Frontiers in Psychology*, Vol. 8, No. 605, DOI: [online]

Notas finales

1. Digitalización: se trata de la incorporación de las tecnologías digitales a los procesos empresariales/sociales, con el objetivo de dinamizarlos.

2. Virtualización: es el acto de crear una versión virtual de algo. Es el proceso de ejecutar una instancia virtual de un sistema informático en una capa abstraída del hardware. El impacto de la virtualización de la actividad económica en la economía de plataforma puede suponer un reto si se quiere aplicar un régimen eficaz de impuesto de sociedades. Se trata de un desafío porque la virtualización de las transacciones comerciales permite a las poderosas empresas transnacionales trasladar fácilmente los beneficios de las jurisdicciones con mayores impuestos a las jurisdicciones con menores impuestos, erosionando así la base imponible de los primeros contextos (Informe Spotlight 2019) [pdf]

Flora Partenio

Flora Partenio forma parte del movimiento feminista en Argentina. Especialista en estudios laborales y estudios de género. Sus áreas de investigación son la economía del cuidado, economía digital y la economía social y solidaria. Forma parte del Equipo de Movilización Social de DAWN y coordina la Escuela de Economía Feminista junto a Corina Rodríguez Enríquez. Integró la formación de DAWN en materia de justicia económica, ecológica y de género (GEEJ) e integra el Comité Ejecutivo. Doctora en Ciencias Sociales por la la Universidad de Buenos Aires. Es profesora en Historia de las Relaciones Laborales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, profesora de posgrado en la Universidad Nacional de San Juan y en la Universidad Nacional de San Martín. Integra la Catedra Libre Virginia Bolten "Construyendo Feminismos Populares en Nuestra América" en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Sala Weleilakeba

Salanieta Weleilakeba (Sala) ha estado en DAWN desde el año 2020 y actualmente es la oficial de investigación con sede en Fiji. Tiene una Licenciatura en Política y Relaciones Internacionales, y en Antropología por la Universidad James Cook. Cuenta con una experiencia de más de cinco años en los campos de investigación en política, comunicaciones y el trabajo jurídico.

UN FUTURO FEMINISTA DEL TRABAJO EN EL MOMENTO POST-PANDÉMICO

por Anita Gurumurthy

Foto | Pixabay de Pexels

La economía digital: Un marco analítico feminista

La economía de plataforma dominante se basa en un modelo insostenible construido sobre la base de una división global del trabajo que lleva las marcas de raza, clase, género y geografía.

Al igual que en las cadenas de suministro de la economía tradicional, en las que las contribuciones de las mujeres no se contabilizan, también en la economía de las plataformas, quienes no cuentan se mantienen invisibles e irrelevantes. Los segmentos más bajos de esta economía están feminizados, ya que incluyen predominantemente a mujeres que trabajan en almacenes sin descanso y sin cortes para atender necesidades básicas (tales como, interrumpir la tarea para ir a los sanitarios), a las agricultoras que mantienen el suministro de verduras a todas las plataformas de comestibles que abastecen a las ciudades, a las que realizan un trabajo deshumanizado y monótono en los centros de almacenamiento de datos y a las trabajadoras remuneradas del hogar, cuyos servicios se utilizan fácilmente sin cambiar realmente la división de género del trabajo arduo y pesado. En la economía de plataforma tampoco hay lugar para la reproducción humana: atravesar un embarazo no es admisible. El trabajo se mitifica como un itinerario meritocrático individual que puede reclamar la igualdad de oportunidades en un mundo que se postula “abierto y sin rigideces”, aunque se construya sobre una precariedad naturalizada: la feminización de la propia fuerza de trabajo.

El futuro de la economía digital a través del prisma de la crisis de COVID-19

La crisis de COVID-19 ha tenido un gran impacto en los sectores económicos principales de los países en desarrollo: la agricultura, la pesca, el turismo, el trabajo remunerado del hogar y el comercio minorista, todos ellos con una alta participación de la mano de obra femenina. En la mayor parte del Sur-global, la pandemia también ha supuesto enormes dificultades para la educación de las niñas. La exclusión digital significa que las mujeres no pueden aprovechar las nuevas oportunidades que se han digitalizado, tales como el crédito, los servicios financieros, la capacitación y los empleos. Con la aceleración de la automatización y la digitalización durante la pandemia, el camino de las mujeres hacia la reincorporación y la participación en la fuerza de trabajo podría verse más empinado.

El modelo de una economía de datos -que han adoptado los países en desarrollo- no está realmente arraigado en sectores que añadan valor agregado en términos de innovación y producción de bienes y servicios reales. Más bien, se basa sobre todo en el trabajo subcontratado. Si las empresas extranjeras afectadas por la pandemia dejan de subcontratar y externalizar el trabajo en línea, las pocas mujeres de estos sectores perderán sus empleos. Mientras tanto, el comercio electrónico despegará y, aunque está claro que impulsará el consumo de alta gama, no está claro cómo se beneficiarán las cadenas de suministro nacionales.

En el caso de Asia, tan solo China figura entre los 10 primeros países en la economía de los datos, mientras que Japón e India están entre los 25 primeros. Sólo algunos países están presentes en los servicios digitales, como el caso de la computación en la nube. Las mujeres apenas están presentes en estos sectores. Sus empresas no suelen tener ni siquiera un sitio web, y mucho menos instalaciones sofisticadas de computación en la nube.

Gracias a la normativa comercial vigente, los países en desarrollo no pueden imponer aranceles a las empresas extranjeras de comercio electrónico. Esto tendrá sus efectos en el futuro mediato, ya que a medida que los flujos de ingresos procedentes de los aranceles de importación se cortan, los países pobres pueden enfrentarse a dificultades extremas para financiar las políticas sociales, con efectos debilitantes en los presupuestos de género para las mujeres.

Un futuro digital feminista

Para que nuestro futuro digital sea feminista, la necesidad inmediata es ir a lo local y ver cómo las cadenas de valor de datos pueden fortalecer las economías locales de producción e innovación en las que las mujeres son visibles y valoradas, y los ecosistemas naturales respetados.

Expertos/as de todo el mundo han pedido que se preste atención a la justicia distributiva en la etapa de la post-pandemia. Sin embargo, la justicia distributiva carece de sentido a menos que la reproducción social sea el centro de atención en el mundo real. Hoy en día, un nuevo contrato social donde las mujeres sean importantes, es necesario y posible. Esto significa garantizar la ciudadanía social y económica de las mujeres. En este sentido, es importante que se les garantice legalmente el derecho a Internet y, en el caso de las mujeres de sectores pobres en particular, necesitan el acceso a prestaciones gratuitas de datos. Los sectores intermediarios deben intensificar sus estrategias para desplegar políticas de retención y protección de trabajadoras que realizan sus tareas de manera online o de modo remoto.

Se necesitan inversiones públicas en infraestructura digital y que se estimule las cadenas de valor de los datos mediante leyes y políticas adecuadas sobre la propiedad de datos personales y no personales.

Gracias a la normativa comercial vigente, los países en desarrollo no pueden imponer aranceles a las empresas extranjeras de comercio electrónico.

Los gobiernos tienen el deber de reimaginar el papel de la tecnología para una ciudadanía basada en los derechos, en lugar de utilizarla para bloquear a los sectores empobrecidos y despliegan dinámicas autoritarias en nombre de la seguridad. En términos de reactivación económica, las dinámicas que pueden hacerlo dependen de las infraestructuras de datos que los gobiernos deben construir. Los instrumentos tradicionales para frenar a las grandes empresas tecnológicas, como la fiscalidad y las leyes de competencia, sólo pueden llegar hasta cierto punto y no más. El camino que queda por recorrer

exige actualizar las leyes para situar los derechos laborales en la fase digital que nos encontramos, con el fin de contrarrestar la excepcionalidad de las plataformas. A nivel internacional, es necesario adoptar indicadores que capten el Producto Bruto de Datos y la proporción de mano de obra femenina, en concreto, en la economía de los datos. Es hora de que los países en desarrollo se unan para proponer un marco multilateral de regulación para los datos y la inteligencia artificial (IA), que promueva sociedades futuras justas e igualitarias.

Pero los avances más importantes pueden provenir de las formas alternativas de organización económica. No olvidemos que el poder descentralizado de Internet puede aprovecharse para favorecer las economías sociales y solidarias - cooperativas que pueden federarse a través de cadenas de valor de datos - transfiriendo los dividendos de los datos de las corporaciones al trabajo.

Sin un nuevo pacto feminista de lo global a lo local, corremos el riesgo de arrinconar a las mujeres bajo una presión extrema, incluso cuando la economía de plataforma y su ADN para la proliferación viral encuentra nuevas vías en línea para discutir las ideas neoliberales de los cuerpos, los parametros de belleza y del bienestar. Las opciones políticas que se tomen en la economía digital, son la clave de la ciudadanía social y económica de las mujeres. Continuar, como hasta el momento, con nuevas ideas neoliberales puede reprivatizar el trabajo de las mujeres, borrando sus contribuciones a la creación de valor y llevando sus cuerpos físicos a lugares ocultos e invisibles.

Anita Gurumurthy

Anita Gurumurthy es fundadora y Directora Ejecutiva de IT for Change, donde dirige la investigación sobre economía de plataformas, la gobernanza de los datos, la Inteligencia Artificial, la democracia en la era digital y los marcos feministas sobre justicia digital. Participa activamente en la defensa nacional e internacional de los derechos digitales y contribuye continuamente a espacios académicos, mediáticos y medios de comunicación. Es asesora y experta en varios organismos como el Grupo de 10 miembros del Secretario General de las Naciones Unidas en apoyo del Mecanismo de Facilitación de la Tecnología, el grupo de trabajo del Foro de Paz de París sobre gobernanza algorítmica, el grupo de trabajo de Save the Children ICT4D Brain Trust y la Junta de Minderoo Tech & Policy Lab.

LA PARADOJA DEL TRABAJO ESENCIAL DURANTE LA PANDEMIA: El trabajo de plataforma en Argentina

por Flora Partenio

Foto | Rafael Vilela

Las nuevas formas de trabajo que han surgido con el advenimiento de la economía de plataforma han planteado nuevos retos en la lucha permanente por los derechos laborales, de seguridad social y de protección social. Durante la pandemia, estos desafíos se reforzaron, especialmente en los países que no contaban con un marco normativo para proteger los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Al mismo tiempo, las empresas de plataformas ampliaron su valor en el mercado, presionando contra las exigencias de regulación tributarias y fiscales y socavando las demandas por mejores condiciones laborales y protecciones sociales para las trabajadoras y trabajadores que dependen de estos sectores para obtener ingresos.

En marzo de 2020, el gobierno argentino decretó una serie de medidas de aislamiento obligatorio como parte de la emergencia sanitaria inducida por la pandemia declarada en todo el país. Estas medidas especificaban las categorías de trabajadoras y trabajadores a quienes se les prohibía acudir a los lugares de trabajo físico y transitar por la vía pública y otras a quienes se eximía de cumplir estas normas por ser "esenciales en la emergencia". Quienes se dedicaban al reparto de alimentos, comestibles y medicinas a través de plataformas, pertenecían a este último grupo, ya que cumplían una "actividad esencial" que permitía al resto de la población quedarse en casa. A medida que los países entraban en confinamientos parciales y totales en todo el Sur y el Norte, el trabajo de delivery lo realizaban íntegramente los y las repartidoras -riders- en plataformas basadas en aplicaciones móviles (Partenio, Cordero y Valencia Castro, 2020).

Incluso antes de la pandemia, el sector del reparto en Argentina estaba monopolizado por un puñado de empresas translatinas o transnacionales. Operaban como "intermediarias" vía plataformas digitales, asignando pedidos a repartidores a través de aplicaciones móviles

con geolocalización. Dotadas de un modelo de negocio con bajos costes de instalación, estas plataformas basadas en aplicaciones se expandieron rápidamente por diferentes ciudades. En ausencia de regulaciones laborales y fiscales, han podido aumentar sus beneficios de forma exponencial. En el marco de la crisis sanitaria, fueron capaces de consolidar aún más su posición en el mercado, en gran parte debido a la mayor dependencia generada con las tecnologías digitales.

Pero incluso mientras las empresas obtenían millones de dólares de beneficios, los y las repartidoras que trabajaban en estas plataformas se esforzaban por cumplir un servicio esencial con gran riesgo para su salud y sin contar con medidas de protección social que garantizaran su seguridad. La debilidad o inexistencia de un marco normativo laboral y la informalidad del trabajo en las plataformas hicieron que éstas no tuvieran (ni tengan) la obligación de destinar una parte de sus beneficios a la protección de las trabajadoras y los trabajadores. El "oportunismo de la cuarentena", producido en la crisis y el confinamiento, reiteró lo que ya sabíamos: que el capital siempre tiene una salida (Gurumurthy y Chami, 2020).

Así, las paradojas del trabajo en plataformas se hicieron especialmente evidentes durante la crisis de Covid-19. Las trabajadoras y los trabajadores exentos de cumplir el decreto de aislamiento obligatorio en Argentina fueron considerados "esenciales", pero sus salarios y condiciones laborales no fueron prioritarios. Durante los primeros días de la pandemia, algunas empresas de plataformas lanzaron campañas alabando el "heroísmo" de las trabajadoras y los trabajadores de reparto durante el aislamiento. "Por repartir lo que necesitamos, los llamamos héroes de Rappi", decía uno de las campañas publicitarias. Frente a esto, las organizaciones sindicales respondieron: "no somos héroes ni heroínas. Somos trabajadores y trabajadoras en riesgo", dejando al descubierto los intentos de las empresas de aplacar a las trabajadoras y los trabajadores con una retórica vacía, sin proporcionarles los equipos básicos de protección social (barbijos, desinfectantes, guantes, etc.) y exponiéndolos al riesgo de contagio.

En estas condiciones, las trabajadoras y los trabajadores migrantes se encontraron en una situación de mayor vulnerabilidad. Es esta mano de obra precaria, deslocalizada y subcontratada la que sostiene la economía de plataforma en distintas ciudades de América Latina. Los estudios demuestran que una gran proporción de las personas que trabajan en el reparto a través de Apps en América Latina son migrantes que no tienen posibilidades de acceder a ingresos formales (CEPAL/OIT, 2019). Un estudio de 2019 indicó que las

trabajadoras y los trabajadores migrantes jóvenes constituyen una parte importante del sector del reparto en Argentina. Durante la pandemia, estas personas migrantes permanecieron sin atención médica de emergencia ni protecciones sociales en el país de acogida, y sin poder regresar a sus países de origen, encontrándose en una situación de doble encierro (CEPAL/OIT, 2020). Además, la población migrante también ha sido la más afectada por el aumento del desempleo en Argentina tras la pandemia, especialmente entre las y los jóvenes.

A mediados de julio de 2020, durante los ocho meses de confinamiento en la Ciudad de Buenos Aires -capital de Argentina- el gobierno local impulsó una legislación que colocaba a las empresas de plataformas basadas en aplicaciones en una posición de ventaja y sumía a las trabajadoras y los trabajadores de reparto en una mayor precariedad. La legislación modificó el Código de Tráfico y Transporte, liberando a las empresas de plataformas de sus obligaciones como empleadores y socavando los derechos de las trabajadoras y los trabajadores con la implementación de requisitos de registración para transitar en la vía pública.

Es esta mano de obra precaria, deslocalizada y subcontratada la que sostiene la economía de plataforma.

Este es sólo un ejemplo de las muchas formas en que la pandemia ha agravado las vulnerabilidades a las que se enfrentan las trabajadoras y los trabajadores en un panorama ya desregulado. Ha demostrado, una vez más, que siempre es el capital el que acaba teniendo prioridad. En todo el mundo, la demanda de derechos que garanticen incluso una protección mínima a las y los repartidores se ha visto frustrada por los poderosos grupos de presión empresariales y las fuerzas políticas de los gobiernos locales y nacionales. Y esto ha sucedido en otros sectores de plataformas (transporte, logística).

Pero no se puede permitir que la falta o la pérdida de derechos se convierta en la “nueva normalidad”. La situación exige un replanteamiento urgente de cómo continuar y redoblar la lucha por los derechos laborales en el contexto post-pandémico. ¿Qué estrategias

adoptamos frente al “oportunismo del confinamiento” que han tenido las empresas? ¿Cómo articulamos una agenda que combine los derechos de las y los migrantes, los derechos de las mujeres con la agenda de los derechos laborales y digitales?

Aunque la pandemia ha exacerbado la vulnerabilidad de las trabajadoras y los trabajadores, también ha creado una oportunidad para una pedagogía social que responda a estas cuestiones. Visto así, la crisis actual puede ser un punto de partida para transformaciones a largo plazo comprometidas con la sostenibilidad de la vida. Es imperativo que aprovechemos este momento para plantear una nueva agenda de justicia digital atenta a los derechos laborales.

Referencias

Banga. K., (2020). ‘Can the Digital Economy Help Mitigate the Economic Losses from COVID-19 in Kenya?’, *ODI*, consultado el 24 de enero de 2022. [pdf]

CEPAL/OIT., (2019). “Situación del empleo en América Latina y el Caribe: Evolución y perspectivas de la participación laboral de las mujeres en América Latina”, Nº 21 (LC/TS.2019/66), Santiago.

CEPAL/OIT., (2020). “Situación del empleo en América Latina y el Caribe. El trabajo en tiempos de pandemia: Los Desafíos de la Enfermedad del Coronavirus (COVID-19)”, No. 22 (LC/TS.2020/46), Santiago.

Gurumurthy. A., and Chami. N., (2020). ‘A 3-Point Agenda for Platform Workers; as if the South Matters’, *Bot Populi*, consultado el 24 de enero de 2022. [online]

Partenio. F., Cordero. K. H., and Castro. B. V., (2020). ‘Pandemic Meets Precarity: The Case of Platform Delivery Work in Latin America’, *Bot Populi,* consultado el 24 de enero de 2022. [online]

Flora Partenio

Flora Partenio forma parte del movimiento feminista en Argentina. Especialista en estudios laborales y estudios de género. Sus áreas de investigación son la economía del cuidado, economía digital y la economía social y solidaria. Forma parte del Equipo de Movilización Social de DAWN y coordina la Escuela de Economía Feminista junto a Corina Rodríguez Enríquez. Integró la formación de DAWN en materia de justicia económica, ecológica y de género (GEEJ) e integra el Comité Ejecutivo. Doctora en Ciencias Sociales por la la Universidad de Buenos Aires. Es profesora en Historia de las Relaciones Laborales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, profesora de posgrado en la Universidad Nacional de San Juan y en la Universidad Nacional de San Martín. Integra la Catedra Libre Virginia Bolten “Construyendo Feminismos Populares en Nuestra América” en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN FIYI

por Sala Weleilakeba

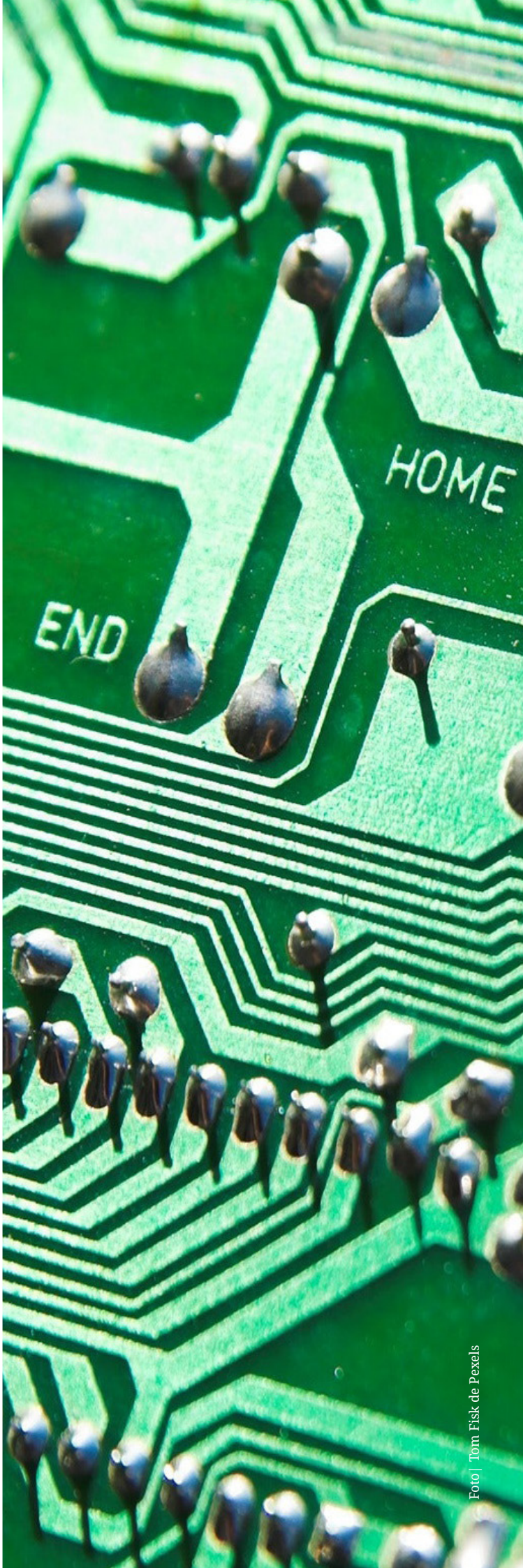


Foto | Tom Fisk de Pexels

Si bien las computadoras eran el principal medio de acceso a internet en la década de 1990 y principios de 2000, la introducción y posterior omnipresencia de los teléfonos inteligentes, con su comodidad y portabilidad, fue lo que impulsó el auge de internet en Fiyi en la última década (Wilmer, Sherman y Chein, 2017). Este artículo rastrea la evolución de la tecnología y la digitalización en Fiyi, analiza cómo las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han impulsado la cuarta revolución industrial en el país y examina el impacto en las mujeres.

Evolución de la tecnología y la digitalización en Fiyi

A principios de la década de 2000, Fiyi sólo contaba con 23.000 usuarios de Internet, lo que suponía el 2,8% de la población de entonces. En las últimas dos décadas, esa cifra se ha disparado a más de 634.000 usuarios, es decir, el 70,5% de la población (Kemp, 2021). Como en muchos otros países en desarrollo, los obstáculos para una mayor expansión de la penetración de Internet[1] son la falta de infraestructuras (electricidad, computadora personal, línea telefónica) y la asequibilidad. A pesar de estos contratiempos, las islas del Pacífico están experimentando una transformación digital que podría tener importantes implicaciones en la forma en que la gente aprende, se comunica, participa en el debate político, coordina actividades y accede a los servicios.

Las TIC impulsan la 4ª revolución en Fiyi (y en la región)

Uno de los principales factores que impulsan la transformación digital en Fiyi es la desregulación y la reforma del sector de las telecomunicaciones, que ha hecho que la propiedad del teléfono sea asequible y accesible, y ha impulsado el auge del uso de la telefonía móvil (Cave, 2012). Antes de poner fin a su monopolio de las telecomunicaciones, los precios de los teléfonos móviles en Fiyi estaban entre los más altos del mundo (Minges y Gray, 2004). Desde entonces, el número de conexiones móviles ha aumentado hasta 1,25 millones en enero de 2021, el doble de la población del país (Kemp, 2021). Al igual que en otras partes del mundo, los jóvenes de la región son los que adoptan más rápidamente las nuevas tecnologías digitales, sosteniendo y acelerando la revolución de las TIC en Fiyi. Para un número cada vez mayor de isleños del Pacífico, los teléfonos móviles son un medio para superar los retos demográficos, geográficos y económicos. La lejanía geográfica, por ejemplo, se alivia cuando se pueden utilizar servicios y aplicaciones electrónicos para conectarse con los servicios de salud, transferir dinero, acceder a materiales de aprendizaje y organizar eventos, todo ello a través de un teléfono móvil básico (Cave, 2012).

Para un número cada vez mayor de isleños del Pacífico, los teléfonos móviles son un medio para superar los retos demográficos, geográficos y económicos.

Otro uso importante de la tecnología digital ha sido el llamado “dinero móvil”. El mercado de Fiyi está relativamente desarrollado, con grandes proveedores de telefonía móvil como Vodafone y Digicel, e instituciones bancarias como ANZ, BSP, Westpac, etc. que ofrecen opciones de banca móvil. De hecho, Fiyi fue uno de los primeros países de la región en lanzar servicios de dinero móvil. Con el protagonismo de los servicios de almacenamiento en la nube, esto se ha extendido también al ahorro de datos y a las aplicaciones en línea.

El uso del móvil impulsa el aumento de las redes sociales

La penetración de la telefonía móvil en Fiyi y en el conjunto de las islas del Pacífico[2] coincidió con el auge mundial de las redes sociales y contribuyó a impulsar la adopción de estas plataformas en la región. Con más de 610.000 usuarios en enero de 2021, Facebook representa una parte importante del uso de Internet en Fiyi. Solo entre 2020 y 2021, la empresa de medios sociales añadió 50.000 usuarios (Kemp, 2021). Se trata de un aumento considerable en comparación con incluso hace cinco años. En 1997, por ejemplo, solo el 0,22% de las y los fiyianos tenía acceso a Facebook (Chanel y Whippy, 2019). La mayoría de las y los fiyianos que acceden a Internet a través de sus teléfonos móviles, lo utilizan para entrar en plataformas de medios sociales que les permiten conectarse entre sí, formar redes en línea, compartir contenidos, proyectar opiniones, promover el debate y coordinar actividades de formas que eran inimaginables hace solo unos años (Cave, 2012). Esto ha dado lugar a la aparición de una “generación digital” del Pacífico de activistas, pensadores, informadores e influencers.

Foto | Heorhii Heorhiichuk de Pexels

Uno de los efectos más significativos de la revolución de las TIC en Fiyi es la mayor capacidad de las ciudadanas y los ciudadanos para crear y participar en redes en línea dedicadas a exigir una mejor gobernanza (Couts, 2012). Facebook y Twitter han proporcionado al pueblo fiyiano formas fáciles y de bajo costo de participar en diálogos nacionales, regionales e internacionales. Los blogs en línea se han convertido en el espacio preferido para el activismo político desde abril de 2009, cuando el gobierno de Fiyi impuso la censura de los medios de comunicación y restricciones a la libertad de expresión y de reunión. Incluso después de que se levantara oficialmente la censura de los medios de comunicación en enero de 2012, se mantuvieron las sanciones por infracciones (Perrottet, 2012). La revolución de las TIC en Fiyi permitió, por tanto, la expansión de la "democracia digital", es decir, el uso de las tecnologías digitales en los procesos políticos y de gobernanza, así como en las demandas de la sociedad civil de rendición de cuentas y transparencia. No sólo las y los activistas digitales están adoptando los medios sociales. Los gobiernos del Pacífico y las instituciones multilaterales también están utilizando estas herramientas con distintos grados de éxito (GSMA, 2019).

La brecha tecnológica de género afecta negativamente al potencial de crecimiento económico y desarrollo de Fiyi.

Consecuencias de la digitalización para las mujeres

En enero de 2021, Fiyi tenía una población estimada de algo menos de 900.000 habitantes, de los cuales el 49,4% eran mujeres. Si bien la revolución digital encierra un inmenso potencial para mejorar los resultados sociales y económicos de las mujeres, también plantea el riesgo de reafirmar los patrones existentes de desigualdad de género. En primer lugar, una importante brecha digital de género en el sector educativo ha conducido a la codificación de sesgos de género en la tecnología y a la promoción de estereotipos masculinos dentro de los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) (Makarova, Aeschlimann y Herzog, 2019). Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas (y mal pagadas) en STEM, ya que la discriminación y los

prejuicios basados en el género refuerzan los estereotipos culturales sobre las mujeres y su capacidad para desempeñarse en estos campos dominados por los hombres (Kong et al., 2020). En segundo lugar, debido al cambiante mundo del trabajo, como la creciente precariedad de los puestos de trabajo, la escasa representación de las mujeres en los campos tecnológicos amplifica el sesgo de género en los sistemas de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (UNESCO, 2020). Los algoritmos de la IA y los sistemas de aprendizaje automático pueden reforzar y exacerbar potencialmente los estereotipos de género al utilizar conjuntos de datos que conllevan las suposiciones y los prejuicios inherentes a los desarrolladores de algoritmos. La IA también puede repercutir negativamente en el empoderamiento económico de las mujeres y en las oportunidades del mercado laboral al conducir a la automatización del trabajo. Estudios realizados por el Institute of Women's Policy Research descubrieron que las mujeres corren un riesgo significativamente mayor de ser desplazadas debido a la automatización del trabajo que los hombres. En tercer lugar, los públicos de las plataformas refuerzan la falta de libertad. Por ejemplo, la pornografía vengativa es una preocupación creciente en Fiyi. El mayor acceso a internet hace que sea más fácil subir y compartir imágenes y videos privados y/o íntimos, y las mujeres y las niñas son desproporcionadamente víctimas de estos ataques en línea (FWRM, 2018).

En conclusión, la tecnología e internet pueden ser un gran facilitador para las niñas, pero la falta de oportunidades, habilidades y el miedo a la discriminación impiden a muchas utilizar y crear herramientas digitales y contenidos en línea. La brecha tecnológica de género afecta negativamente al potencial de crecimiento económico y desarrollo de Fiyi. Tomando como referencia los datos de uso de internet, la UIT estima que la brecha de género es más pronunciada en los países en desarrollo, con un 16% menos de mujeres que de hombres que usan internet, en comparación con el 2% en los países desarrollados (E-Government for Women's Empowerment in Asia and the Pacific, 2018). Para lograr la igualdad de género, las niñas y las mujeres necesitan un acceso igualitario a la tecnología, a la formación digital y a un internet seguro. Dado que más del 90% de los puestos de trabajo en todo el mundo ya tienen un componente digital, los gobiernos deben invertir en dotar a las mujeres y a las niñas de habilidades digitales, priorizando la educación en materias relacionadas con las TIC. La tecnología es también una gran herramienta para las activistas y tiene el potencial de permitir la acción organizada hacia causas comunes.

Referencias

Cave. D., (2012). 'Digital Islands: How the Pacific ICT Revolution is Transforming the Region', *Lowy Institute*, 21 de Noviembre. [online]

Chanel. A., and Whippy. D., (2019). 'The Internet and Fiji's Future', *Fiji Sun*,18 de Julio, pp. 66. [pdf]

Couts. G., (2012). 'Tech Savvy Youth Sought for Pacific Tech Camp', *ABC Radio Australia*, 15 de Noviembre. [online]

E-Government for women's Empowerment in Asia and the Pacific, (2018). 'Gender Equality and Women's Empowerment Priorities in Fiji'. [online]

FWRM, (2018). 'The Right to Privacy in the Digital Age'. [pdf]

Elon University, (n.d). 'Imaging the Internet', consultado el 30 de Octubre de 2021. [online]

Groupe Speciale Mobile Association, (2019). 'The Mobile Economy: Pacific Islands 2019'. [pdf]

Kemp. S., (2021). 'Digital 2021: Fiji', *DataReportal*, consultado el 11 de Febrero de 2021. [online]

Makarova. E., Aeschlimann. B., and Herzog. W., (2019). 'The Gender Gap in STEM Fields: The Impact of Gender Stereotype on Math and Science on Secondary Students' Career Aspirations', *Frontiers in Education*. Vol 4, No. 60, DOI. [online]

Minges. M., and Gray. V., (2004). 'Bula Internet: Fiji ICT Case Study', *The Telecommunications Union*. [pdf]

Perrottet. A., (2012). 'Fiji: Self-censorship Claims and Denials Fuel Media Debate', *Pacific Media Watch*, consultado el 12 de Septiembre de 2021. [online]

UNESCO - División para la Igualdad de Género. (2020). 'Artificial Intelligence and Gender Equality: Key Findings of UNESCO's Global Dialogue', UNESCO. [pdf]

Wajcman. J., Young. E., and Fitzmaurice. A., (2020). 'Discussion Paper: The Digital Revolution: Implications for Gender Equality and Women's Rights 25 Years After Beijing', *UN Women*, 07 de Diciembre de 2021. [pdf]

Wilmer. H. H., Sherman. L. E., and Chein. J. M., (2017). 'Smartphones and Cognition: A Review of Research Exploring the Links between Mobile Technology Habits and Cognitive Functioning', *Frontiers in Psychology*, Vol. 8, No. 605, DOI. [online]

Notas finales

1- La penetración de Internet es la relación entre el número de usuarios de Internet en un país y sus datos demográficos.

2- La penetración de la telefonía móvil se refiere al número de suscripciones a teléfonos móviles cada 100 personas. Estas cifras deben considerarse en el contexto de que algunos individuos tienen más de una suscripción de teléfono móvil (es decir, tarjeta SIM). Además, no es infrecuente que una familia o comunidad comparta una suscripción de móvil. [online]

Sala Weleilakeba

Salanieta Weleilakeba (Sala) ha estado en DAWN desde el año 2020 y actualmente es la oficial de investigación con sede en Fiji. Tiene una Licenciatura en Política y Relaciones Internacionales, y en Antropología por la Universidad James Cook. Cuenta con una experiencia de más de cinco años en los campos de investigación en política, comunicaciones y el trabajo jurídico.

LA GUBERNAMENTALIDAD DIGITAL EN FIYI DURANTE COVID-19

por Damien Gock

Foto | Heorhii Heorhiichuk de Pexels

Según Michel Foucault, el biopoder implica el ejercicio del poder, especialmente para controlar a las poblaciones "a través de técnicas tan diversas como los censos, las votaciones, la hidrografía y las pólizas de seguro" (Kelly, 2010, p. 4). Este artículo examina brevemente la creciente articulación del biopoder sobre la movilidad y el acceso a los servicios sociales y los esfuerzos de digitalización en Fiyi durante la pandemia de Covid-19. Utiliza el marco analítico de transformaciones políticas de DAWN (Llavneras Blanco y Cuervo, 2021) para situar esta articulación del biopoder en los procesos políticos y las respuestas políticas que surgieron a raíz de la pandemia, con claras implicaciones para el cuerpo, es decir, dónde y cómo pertenecen los cuerpos, si están incluidos o excluidos, o si se consideran esenciales, etc. Desde una lente feminista interseccional, el marco pretende examinar los cambios políticos durante la pandemia en cuatro áreas políticas[1] amplias pero interconectadas que están vinculadas a cuestiones críticas como la creciente prominencia de la esfera digital en las relaciones de poder que está afectando, entre otras cosas, el acceso a los servicios sociales, la educación y el empleo (ibid). Por lo tanto, este artículo explora la digitalización como una forma de biopoder que necesita una mayor investigación, especialmente en el contexto de las múltiples y superpuestas crisis provocadas por la pandemia.

Según Chawala y Joshi (2021), los ecosistemas digitales que utilizan los datos de las ciudadanas y los ciudadanos se crean en un esfuerzo por "facilitar [los] procesos de gobernanza urbana y producción económica". Los autores señalan pertinentemente las lecciones aprendidas del fracaso de los países más grandes a la hora de digitalizar los datos para informar sus políticas sin instituir mecanismos de gobernanza transparentes y participativos (ibíd.).

En su Proyecto de Presupuesto Nacional 2021-2022, el gobierno de Fiyi incluye un programa de digitalización que "establece la armonización de los datos" en los diferentes servicios gubernamentales (Gobierno de Fiyi, 2021a). Según el proyecto de presupuesto, el sistema de registro de vacunación Covid y las aplicaciones móviles[2] que rastrean los movimientos de las personas pueden utilizarse para "aumentar drásticamente la accesibilidad de los servicios gubernamentales" (ibíd., p. 69)[3]. Esta base de datos centralizada contaría con información de las personas, como certificados de nacimiento, números de pasaporte, números de identificación fiscal y números de la caja nacional de previsión, entre otros, pero, irónicamente, excluirá datos estadísticos esenciales que cubren las intersecciones de etnia, raza e identidades religiosas, que no se permite recopilar.[4] [5]

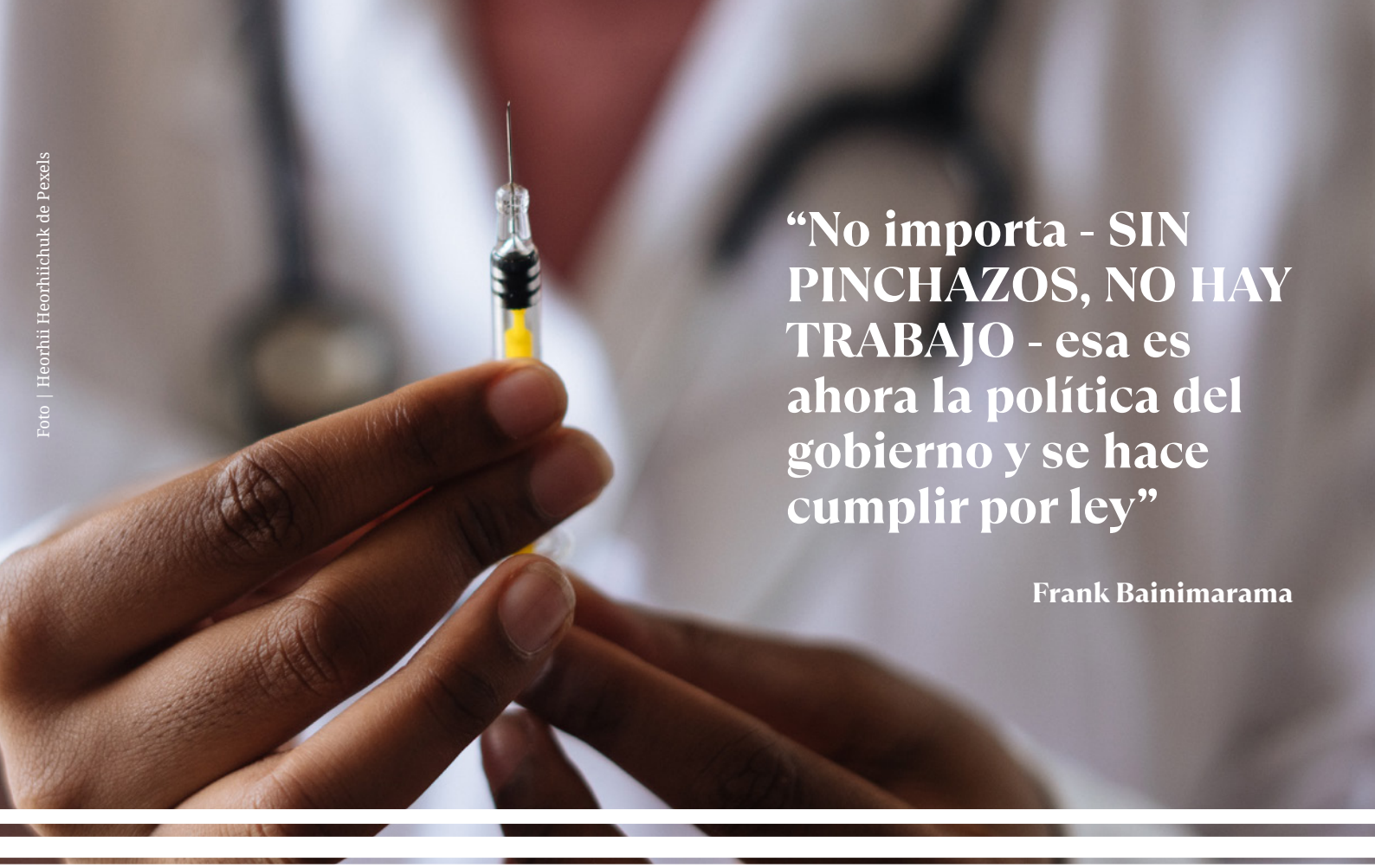


Foto | Heorhii Heorhiichuk de Pexels

“No importa - SIN PINCHAZOS, NO HAY TRABAJO - esa es ahora la política del gobierno y se hace cumplir por ley”

Frank Bainimarama

La capacidad de la infraestructura digital de Fiyi para crear una base de datos de identificación nacional centralizada -que ahora incluye el estado de vacunación- es cuestionable. Un informe de diagnóstico del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC) afirmaba que, en su intento por desarrollar una plataforma nacional de identidad digital, Fiyi se enfrenta a importantes retos en forma de solapamientos, duplicaciones y discrepancias de información, así como de información obsoleta sobre los datos de las personas (FNUDC, 2021). En la actualidad, tampoco existe una integración de la verificación de la identidad por parte de terceros (ibíd.). El informe también señala que sólo el 29% de las personas tiene acceso a un documento de identidad oficial, mientras que el 34% de las y los fiyianos ni siquiera tiene acceso a Internet (ibíd.). En este contexto, las ramificaciones de una base de datos de identificación nacional inadecuadamente centralizada podrían incluir importantes lagunas en los datos nacionales, lo que, a su vez, podría tener implicaciones en las decisiones y orientaciones políticas.

Según los analistas, las previsiones presupuestarias de Fiyi para 2022 incluían un gasto significativamente elevado en iniciativas de protección social, tal y como se había previsto, asignándose 200 millones de FJD (aproximadamente 95,2 millones de USD) como apoyo a las trabajadoras y los trabajadores desempleados de los sectores formal e informal (Goundar, 2021). Sin embargo, la vacunación se ha convertido cada vez más

en un requisito previo para acceder a las transferencias de efectivo y otras formas de bienestar social, así como para continuar en el empleo o conseguir uno nuevo. Al igual que la legislación australiana de 2015 "sin pinchazo, no hay paga", que pretendía aumentar las tasas de vacunación de los hogares vinculándolas a las prestaciones sociales (Yang y Studdert, 2017), Fiyi modificó su Reglamento de Salud y Seguridad en el Trabajo de 1996 haciendo obligatoria la vacunación para entrar en todos los lugares de trabajo. A esto le siguió una campaña dedicada a vacunar a más del 90% de la población de 18 años o más. El Primer Ministro de Fiyi, Frank Bainimarama, anunció: "No importa - SIN PINCHAZOS, NO HAY TRABAJO - esa es ahora la política del gobierno y se hace cumplir por ley".[6]

En otras medidas, el gobierno ha convertido la vacunación en un requisito previo para acceder a las transferencias de efectivo (ayudas al desempleo) por valor de 360 FJD (aproximadamente 170 USD) o más (Gobierno de Fiyi, 2021b). En una línea similar, el Fondo Nacional de Previsión de Fiyi condicionó los retiros de dinero propio de sus miembros a recibir "al menos la primera dosis, antes del 7 de agosto de 2021".[7]

Aunque las vacunaciones obligatorias no son un fenómeno[8] nuevo y algunos pueden argumentar que estas medidas son necesarias para controlar la propagación del Covid-19, los organismos se están regulando cada vez más de formas nuevas y diversas tras la pandemia. Horton (2020) escribe acertadamente que la gubernamentalidad de la salud, durante esta pandemia, exigió un mayor control político, utilizando "diferentes aparatos de poder... para hacerse cargo de los cuerpos" (ibíd., p. 1383). Los gobiernos ven la salud de los ciudadanos como la base para salvaguardar la salud económica, añade (Horton, 2020).

Aquí radica el nexo entre el biopoder -al imponer la vacunación para acceder a puestos de trabajo y prestaciones sociales- y la digitalización. La (falta de) preparación y capacidad de Fiyi para una plataforma de identidad digital nacional es sólo una parte del problema. Lo más importante es que no existe un marco normativo aparente y claramente desarrollado que tenga en cuenta los marcos de derechos humanos en relación con la privacidad, las libertades individuales, la no discriminación y la accesibilidad a los servicios existentes. Y, por último, hay una ausencia total de consultas y colaboraciones públicas sobre la digitalización.

Referencias

Chawala. A.S., and Joshi. D., (2021). 'Smart Cities in India: Of Data Governance and Democratic Deficits', *BotPopuli*, consultado el 19 de Noviembre. [online]

Goundar. N., (2021). 'Fiji's New Budget: Significant Fiscal Challenges'. [online]

Government of Fiji., (2021a). 'Republic of Fiji: Budget of Estimates 2021-2022, presentado al Parlamento el 16 de Julio de 2021.. [pdf]

Gobierno de Fiyi (2021b). Solicitudes de ayuda al desempleo financiada por el Gobierno, abiertas a partir del 9 de agosto de 2021. Comunicado de prensa publicado el 3 de Agosto. [pdf]

Munro Leys Law., (2021) 'Health and Safety at Work (General Workplace Conditions) (Amendment) Regulations 2021'. [pdf]

Horton, R., (2020). Offline: COVID-19 — A Crisis of Power. Comment, *The Lancet*, vol 396, 31 de Octubre.

Kelly, M.G.E., (2010). 'International Biopolitics: Foucault, Globalisation and Imperialism.' *In Theoria: A Journal of Social and Political Theory*, vol. 57, no. 123 (June 2010), pp. [online]

Llavaneras Blanco, M., y Cuervo, M. G., (2021)."La pandemia como portal: Transformaciones políticas que disputan la nueva normalidad". *DAWN*. Suva (Fiji). [pdf]

The Economist, (2021). 'Where Will You Need a Covid Passport?'. [online]

Nailatikau, M. (2021). 'The promise and peril of statistics in Fiji', in 'The Interpreter', publicado por el Lowy Institute, 27 de Octubre de 2021. [online]

Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC), (2021). 'An Inclusive Digital Identity Platform in Fiji: Country Diagnostic', Enero de 2021. [pdf]

Yang, Y.T., and Studdert, D.M., (2017). Linking immunization status and eligibility for welfare and benefits payments. The Australian "No Jab, No Pay" Legislation. Artículo de opinión, *JAMA*, Vol 317 (8), pp. 803-804. [pdf]

Notas finales

1- Macroeconomía, Trabajo y Derechos de los Trabajadores, Migración y Movilidades Humanas, y Cuidados y Protección Social

2- Como la aplicación careFIJI

3- Véase también: here

4- Esto culminó recientemente con la destitución del director general de la oficina que publicó una encuesta sobre el gasto de los hogares y los ingresos que incluía un desglose de los datos de pobreza por etnia y religión (Nailatikau, 2021).

5- Véase el informe completo del HIES aquí: here

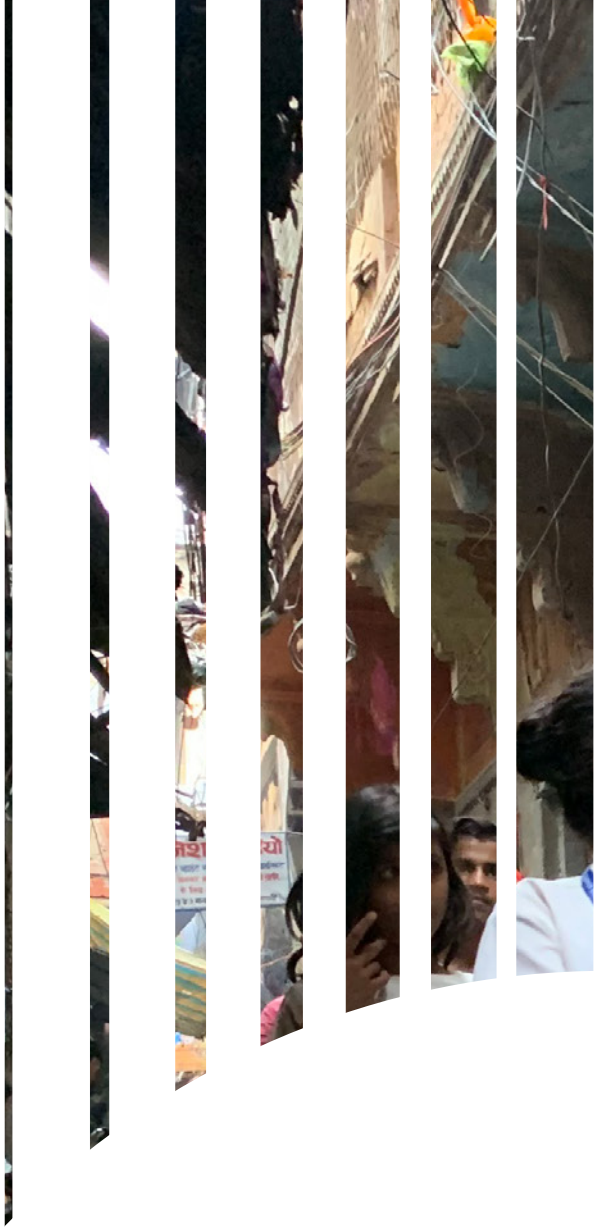
6- Ver: Declaración del PM Bainimarama sobre Covid-19 el 8 de julio de 2021. Disponible en: [online]

7- El comunicado de prensa y los criterios se pueden encontrar aquí: here

8- La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió por primera vez su Certificado Internacional de Vacunación o la comúnmente conocida tarjeta amarilla en 1951 (The Economist, 2021).

Damien Gock

Damien Gock es Asociado de Programas de DAWN con sede en Fiji. A finales de 2017 comenzó una pasantía de investigación con DAWN y posteriormente nombrado como Oficial de Investigación Junior en 2018. Anteriormente había trabajado en el Citizen's Constitutional Forum y en la Universidad del Pacífico Sur. Máster de investigación en Sociología por la Universidad del Pacífico Sur y está actualmente cursando el doctorado en la Universidad de Western Sydney.



¿PUEDE LA JUSTICIA DIGITAL CUMPLIR CON LA JUSTICIA SOCIAL? Lecciones de Kerala durante la pandemia

por Vanita Nayak Mukherjee

Foto | Heorhii Heorhiichuk de Pexels

El estado de Kerala, en el sur de la India, con un largo historial de justicia social, contrasta con gran parte del resto de la India, al haber aplicado un conjunto de sólidas medidas de protección social durante la pandemia de Covid-19 y los consiguientes confinamientos. A medida que la pandemia se agravaba, Kerala también digitalizó progresivamente algunos de sus servicios públicos. Este documento explora la justicia digital en Kerala y sus solapamientos con la justicia social, con especial atención a la educación en línea.

Justicia social y digital: Las conexiones

Acogiendo los principios de igualdad, acceso, participación, derechos humanos y diversidad como guía normativa, este documento adopta un enfoque de la justicia social que reconoce las desigualdades dentro de las sociedades y los obstáculos sistémicos y estructurales que las perpetúan. La justicia digital se basa en los mismos principios, pero con dimensiones adicionales distintas derivadas de las características únicas de Internet y del mundo digital.

En primer lugar, la tecnología digital es una entidad con cara de Jano. Puede ser un factor de empoderamiento en cuanto a la mejora de las oportunidades en la vida de una persona y la apertura de nuevas formas de relacionarse con el mundo. Pero como herramienta de vigilancia, violencia y opresión, también puede restarle poder. En segundo lugar, a diferencia de los bienes públicos como el agua, la electricidad y las carreteras, en los que la infraestructura común y los puntos de distribución se traducen en un acceso para todos los miembros de un hogar, el acceso a Internet está "atomizado", ya que se canaliza a través de aparatos inteligentes de propiedad y uso individual, como teléfonos

y computadoras portátiles. En tercer lugar, incluso cuando los aparatos inteligentes se comparten en los hogares, el acceso y el uso son desiguales, y el poder y las jerarquías de género producen privaciones digitales. Hay más hombres/niños que poseen teléfonos inteligentes (y computadoras portátiles) en comparación con las mujeres y las niñas[1]. Sin embargo, la jerarquía de edad se invierte, ya que los más jóvenes, en su mayoría hombres, acceden a los aparatos que la generación de más edad[2]. Ser conocedor de la tecnología y tener conocimientos digitales da a los jóvenes una ventaja, pero las mismas habilidades no siempre se traducen en acceso para las niñas[3]. En cuarto lugar, a pesar de la naturaleza descentralizada de Internet, sigue habiendo una enorme brecha de acceso entre los privilegiados y los no privilegiados, la población rural y la urbana, y otros. Al igual que la justicia social, la justicia digital reconoce la igualdad sustantiva, en la que el acceso y las oportunidades al conocimiento, el poder y los recursos están disponibles para los diferentes grupos sociales sólo a través de sus ubicaciones socioeconómicas, políticas y culturales[4].

Durante la pandemia, Kerala adoptó la vía digital para prestar servicios públicos, incluida la atención de urgencia (y la telemedicina) a los ancianos, especialmente a las mujeres solteras.

Justicia social y digital en Kerala durante la pandemia[5]

Las iniciativas de justicia social en Kerala incluyen políticas sanitarias y educativas eficaces y un baluarte de sólidas instituciones de autogobierno local descentralizado conocidas como los panchayats. Aunque no son perfectos, los panchayats de Kerala tienen un sólido historial de profundización de la democracia, y han madurado hasta convertirse en un sólido andamiaje de gobernanza tras una serie de intervenciones de capacitación y apoyo técnico por parte del Estado[6]. Una red de 4,5 millones de grupos vecinales fuertes dirigidos por mujeres, llamados *kudumbasree*[7], permite y apoya a los *panchayats*.

Servicios, inversiones e infraestructuras digitales

Durante la pandemia, Kerala adoptó la vía digital para prestar servicios públicos, incluida la atención de urgencia (y la telemedicina) a los ancianos, especialmente a las mujeres solteras. Un portal en línea para discapacitados, accesible a través de teléfonos inteligentes y computadoras portátiles, ofrece servicios de medicina general y atención sanitaria especializada de forma gratuita.[8 9] La educación escolar pública es 100% digital. Kerala, que reconoce que *Internet es un derecho básico* de los ciudadanos y considera prioritarios el desarrollo de competencias , la alfabetización digital y el refuerzo de los recursos humanos, ha realizado importantes inversiones en infraestructuras de TI[11 12] y en las instituciones de apoyo correspondientes[13 14 15]. Con un 56%, Kerala tiene la segunda mayor penetración de Internet de banda ancha de la India, después de la capital nacional, Delhi, con un 69%[16]. La proporción de mujeres con acceso a un teléfono móvil es la más alta en las zonas rurales de Kerala (alrededor del 92,4%), y la segunda más alta en las zonas urbanas (91,8%). En el conjunto de la India, el acceso de las mujeres a los teléfonos móviles era del 47-8% en general, y el de las mujeres era del 41-6% en las zonas rurales y del 62-7% en las urbanas.

Foto | Lalam photography / Shutterstock.com

Iniciativas digitales en las escuelas públicas para la educación virtual en casa durante la pandemia

Las escuelas públicas de Kerala han alcanzado la paridad de género en la matriculación en la secundaria superior, con un 51,8% de chicas matriculadas frente a un 48,2% de chicos[17]. En estas escuelas también se ha completado la transformación hacia una educación 100% digital y clases inteligentes.[18] [19]

Durante la pandemia, el programa First Bell, puesto en marcha para democratizar la transición de la educación escolar digital en las aulas a las clases online en casa, utilizó una estrategia de medios mixtos. Aprovechando el elevado acceso de los estudiantes a la televisión (94%) en sus hogares a través de la tecnología satelital, las lecciones se transmitieron por streaming para un acceso universal y se complementaron con la repetición de las clases en Facebook, YouTube y WhatsApp. Sin embargo, la disponibilidad de clases en línea no se tradujo automáticamente en un acceso universal. Las encuestas revelaron que 260.000 (el 6%) estudiantes de Kerala procedentes de hogares desfavorecidos y que viven en zonas remotas no tenían acceso a un televisor, una computadora portátil o un teléfono inteligente, ni la infraestructura necesaria para utilizarlos.[20]

Una campaña de movilización de recursos encabezada por los *panchayats* de sus respectivas zonas para permitir el acceso a las clases de la Primera Campana dio como resultado generosas contribuciones de smartphones y televisores por parte de la comunidad. Se organizaron clases en línea en los barrios para pequeños grupos. Los grupos de WhatsApp dirigidos por los profesores ayudaron a resolver los problemas de aprendizaje en las tareas.

Hay unos 12.500 alumnos con discapacidad en el sistema escolar público, y 90.902 estudiantes pertenecen a las comunidades indígenas de Kerala que se concentran en los bolsillos remotos. La educación en línea en casa para los alumnos con los seis tipos de discapacidad identificados exige que las lecciones se adapten en cuanto a contenido y pedagogía a las necesidades específicas de cada tipo y se preparen para cada grado y asignatura. Para los estudiantes de las comunidades indígenas, se ha hecho un esfuerzo considerable para mejorar el acceso a través de los centros comunitarios, con televisores o computadoras portátiles instalados por los panchayats, adaptando la pedagogía y superando las barreras lingüísticas.

Conclusión

La justicia digital en Kerala se basa en un largo legado de compromiso del estado con la justicia social. Las inversiones constantes en sanidad y educación han dado resultados imprevistos y positivos durante la pandemia. La digitalización del 100% de la educación pública ha permitido al estado estar preparado y aprovechar las herramientas, la tecnología y la televisión para lograr una cobertura casi universal de la educación en línea, incluso para los estudiantes con discapacidades y de las comunidades indígenas.

El profundo arraigo de la descentralización de la gobernanza en más de 1.000 panchayats es un segundo elemento crítico del éxito de Kerala. Los *panchayats* han desarrollado estrategias clave para institucionalizar la igualdad sustantiva hacia la inclusión universal. La evaluación de las necesidades específicas de los hogares, especialmente de los que están en los márgenes, ha permitido realizar intervenciones personalizadas y llegar a un acceso justo e igualitario para todos y todas, la clave de la justicia digital.

Notas finales

1- https://www.youthkiawaaz.com/2019/10/the-modern-discrimination/; Understanding barriers to and impacts of women's mobile phone adoption in India", por Giorgia Barboni et al., 2018, estudio de la Harvard Kennedy School; https://www.indiaspend.com/wide-gender-gap-in-mobile-phone-access-is-hurting-indias-women/;

2- https://www.statista.com/statistics/751005/india-share-of-internet-users-by-age-group/;

3- Kovacs, A., "Chupke, Chupke':Going Behind the Mobile Phone Bans in North India, 2017, https://genderingsurveillance.internetdemocracy.in/phone_ban/; En algunas comunidades del norte de la India, los ancianos y los hombres han prohibido los teléfonos móviles a las niñas, para impedir su acceso a un mundo digitalmente facilitado fuera de los estrictos controles patriarcales

4- A diferencia de la "igualdad formal" que supone que el Estado garantiza la igualdad a través de leyes, políticas y programas con igual impacto para todos los ciudadanos independientemente de su ubicación, condición o posición.

5- Una versión más larga de este artículo aparece en www.dawnfeminist.org

6- El Instituto de Administración Local de Kerala proporciona apoyo institucional a los Panchayats a través de un riguroso desarrollo de capacidades en materia de liderazgo, cuestiones de género en la gobernanza, etc.

7- Las mujeres de Kudumbasree desempeñan un papel fundamental en los Panchayats, haciendo todo el trabajo de campo con los trabajadores de primera línea: las ASHA, los maestros Anganwadi y los ayudantes. Durante las crisis, asumen múltiples responsabilidades que van más allá de la descripción de su trabajo. La máscara, la producción de PPE y la preparación de alimentos de 300.000 comidas al día en las 1243 cocinas comunitarias fueron gestionadas por Kudumbasree.

8- Véase el primer enlace sobre el funcionamiento de la aplicación E-Sanjeevani para personas con discapacidad visual en Kerala. [online]

9- En Kerala hay 7 millones de personas mayores de 65 años. Los servicios para las personas que viven solas se prestan a domicilio, con visitas semanales de personal sanitario y asesores, y un suministro regular de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad. [online]

10- La visión política sobre la capacitación digital de los ciudadanos hace hincapié en los principios de “Libertad, Ubicuidad (léase Universal), Inclusión, Transparencia y Seguridad para todos”.

11- La misión Akshaya Kerala sobre gobernanza electrónica y alfabetización digital, fue la mayor red de banda ancha inalámbrica rural del mundo, en 2002, para sinergizar la inclusión digital y social. Se reprodujo a escala en el resto del país como los CSC (Centros de Servicios Comunes).

12- Tanto la política de TI de 1998 como la de 2017 son iniciativas del gobierno de coalición del Frente Democrático de Izquierda [pdf]

13- KSITIL es una sociedad anónima. https://ksitil.kerala.gov.in/telecom_infrastructure; Para un plan detallado de infraestructura digital y otras iniciativas de TI relacionadas, véase el informe “Digital Kerala” de la Misión de TI del Estado de Kerala, 2016.

14- https://www.fonearena.com/blog/297415/kerala-government-kfon-project-fiber-connection-december-2020.html; K-Fon es una empresa conjunta entre la Junta Estatal de Electricidad de Kerala y la Bharat Electronics Limited (BEL).

15- https://kiifb.org/actvtis.jsp?vdl; El KIIFB estableció un programa de notas a mediano plazo (MTN) garantizadas por valor de 50 000 millones de INR que cotiza en el mercado internacional de valores de las Bolsas de Londres y Singapur. Esto permite al KIIFB acceder al mercado internacional de bonos mediante la emisión de “Masala Bonds”.

16- https://www.onmanorama.com/business/news/2020/05/14/intenet-penetration-in-india-iamai-report.html;

17- Fuente: Dirección de Educación Secundaria Superior, 2017-18 según lo informado en Kerala Economic Review, 2017. La matriculación total de las niñas es de aproximadamente el 49%. Superan a los varones en la etapa de secundaria superior, lo que indica que las tasas de abandono de los varones son más altas en comparación con este nivel.

18- https://kerala.gov.in/it-school; Política de TI de Kerala, 2017.

19- La iniciativa de Educación Digital forma parte de la “Misión de Rejuvenecimiento de la Educación Pública” de la Misión “Nava Keralam” o “Nueva Kerala” de 2016.

20- Una niña tribal se suicidó porque el televisor de su casa no funcionaba. Irónicamente, era una de las alumnas que figuraban en la lista de sus profesores para acceder a las clases en línea de First Bell.

Vanita Nayak Mukherjee

Vanita Nayak Mukherjee es una activista e investigadora feminista de la India. Es integrante del Comité Ejecutivo de DAWN y co-dirige la campaña Feministas por una Vacuna Popular (FPV) de DAWN & TWN, así como el equipo de análisis temático sobre salud sexual y derechos reproductivos (SRHR) en DAWN. Ha formado parte de los movimientos feministas y sociales de Kerala (India) desde principios de la década de 1980, y ha trabajado con grupos y redes de base, contribuyendo a la defensa de los derechos de las mujeres, la creación de capacidades y la investigación para la acción. Tiene un Máster en Estudios de Género del Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de Holanda y es Licenciada en Biología. Vanita fue responsable de programas y, posteriormente, asesora de la Fundación Ford en India, Nepal y Sri Lanka, dirigiendo las líneas de Sociedad Civil y Justicia Social, y de Género, Justicia Racial y Étnica.

GOBERNANZA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

por Cecilia Alemany y Anita Gurumurthy

Foto| Brett Sayles de Pexels

La revolución de los macrodatos y las tecnologías de aprendizaje automático asociadas que permiten nuevos modos de producción, uno de cuyos factores es la inteligencia digital, están marcando el comienzo de un cambio de paradigma. Mientras que las leyes relacionadas con los datos y la inteligencia artificial (IA) siguen siendo incipientes en la mayoría de los países, los grupos de derechos civiles están expresando su preocupación por los sesgos inherentes a la IA y las consecuencias para los derechos fundamentales, incluido el derecho a la igualdad y la no discriminación. El personal empleado en las grandes empresas digitales también está alzando la voz contra la militarización del ciberespacio por el nexo entre el Estado y las empresas. Este artículo destaca las preocupaciones en torno a la revolución de los datos y sugiere formas de repensar la gobernanza de los datos y la IA.

El contexto digital presenta posibilidades para una cuarta revolución industrial, y la inteligencia digital obtenida a través del procesamiento de datos puede proporcionar a los países en desarrollo los medios para una transformación estructural y una ventaja competitiva. Al mismo tiempo, la regulación de los datos debe abarcar las preocupaciones que abordan la multivalencia de los datos, reconociendo la inalienabilidad de los datos en relación con la identidad personal, pero también siendo conscientes del recinto de los datos como recurso económico. Es imperativo gestionar y regular los flujos de datos transfronterizos prestando la debida atención a la protección de los datos personales a través de una amplia gama de políticas de datos nacionales y globales: políticas industriales digitales, políticas comerciales, políticas sociales y políticas de desarrollo.

El mercado de datos

Las empresas de plataformas se encuentran entre las corporaciones transnacionales más poderosas, alimentadas por algoritmos (instrucciones matemáticas que procesan datos) que funcionan con nuestros datos. Es más, las empresas transnacionales utilizan nuestros datos como si fueran suyos. Es casi imposible para los ciudadanos navegar por el complejo terreno del "consentimiento", que a menudo se recomienda como solución en el mercado de datos, para tomar decisiones sobre qué datos compartir, con quién y para qué. Como participantes tardíos en el juego de los datos, la mayoría de los países en desarrollo carecen de conjuntos de datos sólidos y legibles por máquinas. En consecuencia, es posible que estos países aún no estén listos y bien preparados para crear infraestructuras digitales y de datos, incluidos los bienes públicos adecuados a la nueva era digital.

Implicaciones para los países en desarrollo

No es de extrañar que las naciones en desarrollo se hayan convertido en "los terrenos de extracción de datos, en el peor de los casos, y en los servicios auxiliares o granjas de servidores para el procesamiento de datos de bajo nivel, en el mejor de los casos" (Gurumurthy, Bharthur y Chami, 2018). Las desigualdades estructurales en la economía digital se reproducen tanto entre los países como dentro de ellos. Tal y como están las cosas, el Sur Global corre el riesgo de convertirse en un patio de recreo de innovación no regulado para los gigantes tecnológicos si no se desarrollan medidas políticas adecuadas y exhaustivas que puedan gobernar sus operaciones (IT for Change, 2018). Los desafíos para los países en desarrollo incluyen la "falta de coordinación para la innovación, la falta de capacidad para movilizar los recursos nacionales, la incapacidad para crear vínculos, la baja resiliencia del sector empresarial nacional, la evasión de impuestos y la falta de regulación de la competencia" (Sampath, 2019).

La IA y las decisiones políticas públicas

Muchas decisiones de política pública que dan forma a la experiencia cotidiana de los ciudadanos no se encuentran en las normas legislativas, sino en los códigos de software y la IA elaborados por científicos e innovadores en entornos privados (y monopolísticos) (Secretario General de la ONU, 2018). Todos los países necesitan comprender el impacto del aprendizaje profundo y los modelos de predicción inteligente en el diseño y la respuesta de las políticas públicas, para aprovechar los beneficios potenciales, así como para mitigar los riesgos de estas intersecciones.

La democracia y los derechos humanos en peligro

Los retos que plantean los datos, la IA y el aprendizaje automático están directamente relacionados con la democracia y la libertad de expresión por varias razones. En primer lugar, la participación en las redes sociales promueve un pensamiento binario en lugar de interpretaciones matizadas. Si las redes sociales y sus algoritmos tienen éxito en este tipo de modelo de negocio polarizado, la paz y la democracia podrían perder terreno. En segundo lugar, los datos se han convertido cada vez más en una puerta de entrada a nuestro mundo, nuestro dinero y nuestro voto, y son hoy la base de las campañas de marketing dirigidas por algoritmos. En tercer lugar, los datos y la IA proporcionan una nueva técnica para la potencial interferencia del Estado con la democracia y los derechos de privacidad, la libertad de expresión y la movilización social. En cuarto lugar, el papel de las empresas de plataformas en las violaciones de los derechos humanos y constitucionales, incluidas las acciones que promueven la violencia contra personas o comunidades seleccionadas en función de su uso de datos o del uso de los datos que recopilan, procesan y venden, no está claramente comprendido ni regulado. Por último, pero no menos importante, algunos de los algoritmos y modelos de predicción de las empresas de plataformas violan las garantías constitucionales nacionales contra la discriminación. La evaluación de las responsabilidades legales de los mayores monopolios de la economía digital es un área emergente para la regulación nacional y los derechos humanos internacionales, pero hay poco movimiento, si es que lo hay, en este frente vital.

Desarrollo justo y equitativo en la era de la IA

En este contexto, la cuestión clave de la gobernanza en la economía digital mundial se refiere a la propiedad y el control de los datos. La autorregulación de las empresas de Internet no funcionará. Regular la IA y la nueva era digital primero y principalmente a través de acuerdos comerciales de comercio electrónico, ya sean plurilaterales, multinacionales o bilaterales, tampoco funcionará. El Foro de Gobernanza de Internet (FGI), como espacio de múltiples partes interesadas, tiene el potencial de avanzar en este ámbito, pero no está elaborando ninguna norma. Por ello, existe un riesgo cada vez mayor de que un pequeño grupo de países establezca las normas sobre los datos desde la perspectiva de los acuerdos comerciales.

Si la comunidad internacional permanece como espectadora silenciosa mientras los monopolios siguen siendo dueños de los datos de la gente y utilizan la IA sin

desmantelar sus prácticas abusivas y desaprender sus prejuicios, las asimetrías estructurales existentes se reproducirán en la forma de gobernar o desgobernar los datos y la IA. Lo que se necesita, en este escenario, es "un marco legal y político ágil para frenar el exceso de plataformas" (IT for Change, 2018) y el espacio político para que los países en desarrollo obtengan valor económico de los datos que sus ciudadanos están generando.

Imperativos nacionales

Muchos gobiernos de países en desarrollo (y otros gobiernos que no estuvieron entre los primeros impulsores de la IA) ignoran los profundos riesgos y tecnicismos del uso ampliado de la IA para casi todo. A nivel mundial, necesitamos actualizar las leyes antimonopolio para tomar medidas contra el abuso de mercado de las empresas de plataformas de forma más rápida y eficaz (Zimmerman, 2019). Los países deben actualizar los marcos regulatorios nacionales sobre datos, IA y aprendizaje automático, legislar contra las violaciones de derechos por parte de las empresas transnacionales y dejar claros los vínculos entre los abusos de los derechos digitales y los derechos constitucionales existentes. Además, la gobernanza de los datos y la IA implica normas internacionales para los Estados como titulares de obligaciones, con desafíos intrínsecos a su propio uso de los datos y la IA para el diseño de políticas públicas y la vigilancia. Por lo tanto, es necesario entender cómo proteger a los ciudadanos de las violaciones de derechos en la era digital y cómo evitar la erosión de los derechos cívicos, políticos, económicos, sociales y culturales debido a los algoritmos ocultos y las tecnologías de aprendizaje automático impulsadas por los poderes digitales privados y los tomadores de decisiones.

Las Naciones Unidas son el foro en el que la IA debe ser entendida y gobernada como una condición crucial para los derechos humanos, la democracia, la paz y el desarrollo sostenible. Sin embargo, este proceso debe ser liderado por los gobiernos, y no por las empresas de plataformas y sus intereses, para que las regulaciones no se limiten sólo al comercio o al comercio electrónico, como parece ser el caso actualmente.

Referencias

Gurumurthy. A., Bharthur. D. and Chami. N., (2018). 'Policies for the platform economy: Current trends and future directions', *IT for Change*. [pdf]

Fukuda-Parr. S., and McNeill. D., (2019). 'Knowledge and Politics in Setting and Measuring the SDGs: Introduction to Special Issue', *Global Policy,* Vol. 10. Suplemento 1, pp. 5-15. [online]

IT for Change., (2018). 'Data Sovereignty',en Spotlight on Sustainable Development: *Exploring New Policy Pathways*, pp. 81-82. [online]

James. D., (2019). *'South Needs Data Digitalization Policies, Say CSO Experts'*, Red del Tercer Mundo, 16 de Abril. [online]

Sampath. P.G., (2019). *'Regulating the Digital Economy: Dilemmas, Trade Offs and Potential Options'*, South Centre Tax Initiative, Marzo 2019. [pdf]

Smith. M., and Neupane. S., (2018). *'Artificial Intelligence and Human Development: Toward a Research Agenda'*, IDRC White Paper. [online]

UNCTAD., (2017). *'Information Economy Report 2017: Digitalisation, Trade and Development*, UNCTAD Conference, 23 de Octubre.. [pdf]

Secretario General de la ONU, (2018). *'Secretary General's Strategy on New Technologies'*, Naciones Unidas. [online]

Zimmerman. J., (2019). *'AI with European values. How Europe can find its own way when it comes to Artificial Intelligence, Data Protection and Democracy'*, IPS, 5 de Febrero [online]

Cecilia Alemany

Cecilia Alemany es Directora Regional Adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Integró el Comité Ejecutivo de DAWN. Es candidata a Doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y candidata a Doctora en Estudios Interdisciplinarios de Género por la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Tiene un Máster en Previsión Internacional por la Université Paris 5 René Descartes y es Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República, Uruguay.

Anita Gurumurthy

Anita Gurumurthy es fundadora y Directora Ejecutiva de IT for Change, donde dirige la investigación sobre economía de plataformas, la gobernanza de los datos, la Inteligencia Artificial, la democracia en la era digital y los marcos feministas sobre justicia digital. Participa activamente en la defensa nacional e internacional de los derechos digitales y contribuye continuamente a espacios académicos, mediáticos y medios de comunicación. Es asesora y experta en varios organismos como el Grupo de 10 miembros del Secretario General de las Naciones Unidas en apoyo del Mecanismo de Facilitación de la Tecnología, el grupo de trabajo del Foro de Paz de París sobre gobernanza algorítmica, el grupo de trabajo de Save the Children ICT4D Brain Trust y la Junta de Minderoo Tech & Policy Lab.

Foto | Kholoud Al-Ajarma

SUBVERTIR LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA ISRAELÍES: Una nota sobre la resistencia palestina

por Kholoud Al-Ajarma

Los puestos de control, los sistemas de recopilación de datos biométricos, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la vigilancia telefónica por Internet y la vigilancia policial cada vez más digitalizada son solo algunos ejemplos de la infraestructura de seguridad colonial de Israel (cf. Zureik, 2011; Hammami, 2015). Estas tecnologías se están utilizando para controlar a los palestinos, vigilar sus movimientos, inspeccionar lo que dicen y hacen, y restringir su movilidad incluso en zonas palestinas (Peteet, 2017; Nashif y Fatafta, 2017). En este artículo, analizo aspectos de esta vigilancia colonial, incluida la vigilancia física en los puestos de control y la vigilancia digital en las redes sociales, examinando las experiencias de un grupo de diez mujeres palestinas, de entre veinticinco y setenta y seis años, de Belén y sus alrededores. Estas narraciones ofrecen una perspectiva de género sobre cómo las mujeres que viven bajo vigilancia constante resisten los efectos de dicha vigilancia y hacen frente a la opresión diaria de las estrategias coloniales patriarcales. También ejemplifican lo que la población palestina en general experimenta habitualmente bajo la ocupación.

En Cisjordania, las barreras físicas, como los puestos de control, siguen siendo cuellos de botella con un alto grado de seguridad, que dividen a los palestinos y restringen sus movimientos (cf. Griffiths y Repo, 2021; Peteet, 2017). Los palestinos tienen que solicitar permisos para poder cruzar los puestos de control, un largo proceso que incluye controles de seguridad y de antecedentes (Weitzberg, 2021). Según las encuestadas, a las mujeres solteras siempre se les deniega el permiso. En cualquier caso, la concesión de un permiso no libra a los palestinos de largos periodos de espera, interrogatorios y controles de identidad invasivos y amenazas de violencia en los puestos de control (Griffiths y Repo, 2021). Gran parte de la literatura existente sobre la vigilancia en los puestos de control israelíes amplifica las voces de los hombres, mientras que las experiencias de las mujeres siguen siendo marginales (por ejemplo, Griffiths y Repo, 2021; Hammami, 2015). Las encuestadas narran varias historias sobre cómo las prácticas de intimidación y humillación de los soldados israelíes convierten los puestos de control en espacios amenazantes (cf. Rijke y Minca, 2018: 39). Las historias de mujeres como Ibtissam Kaabneh, una mujer de 28 años que fue asesinada a tiros en el puesto de control de Qalandiya, cerca de Jerusalén, el 12 de junio de 2021, persiguen a los encuestados cada vez que tienen que cruzar un puesto de control.

En algunos casos, las tradiciones culturales y religiosas de modestia se suman a la vulnerabilidad de las mujeres ante las intromisiones y el acoso de jóvenes soldados, hombres o mujeres, que no muestran ningún respeto por las relaciones de género, el embarazo, las condiciones médicas o la edad. A pesar de estas experiencias, o quizás a causa de ellas, las encuestadas hablaron de estrategias de resistencia a la hipervigilancia. Las mujeres insisten en desafiar todo tipo de incomodidades para visitar Jerusalén para

Foto | Anne Paq

Una mujer palestina confronta a soldados israelíes durante la manifestación semanal contra el Muro Israelí en la aldea de Al Ma'sara, en Cisjordania, el 4 de julio de 2008. El Muro Israelí aislaría a la aldea de sus tierras agrícolas si se construye como está previsto.

rezar. Un ejemplo es el de Aicha, de 75 años, que tiene implantes quirúrgicos de metal en la rodilla, pero debe pasar por los detectores de metales cada semana, y es retenida mientras espera en la cola para mostrar una carta del cirujano en la que se explica su implante de metal; en el puesto de control no se hacen concesiones por su evidente malestar y su edad. La vida cotidiana de los palestinos sigue viéndose afectada por la infraestructura de seguridad israelí que invade sus interacciones sociales, sus hogares y sus comunidades (Griffiths y Repo, 2020). Las encuestadas transmitieron la sensación de ser observadas, perseguidas y atrapadas por el aparato de vigilancia israelí (cf. Shalhoub-Kevorkian, 2012). Esta intromisión en la vida privada de los palestinos es posible gracias a la ocupación y el control por parte de Israel de la infraestructura de telecomunicaciones utilizada por las empresas palestinas y los proveedores de servicios de Internet. Varias encuestadas expresaron su sensación de inseguridad y su temor a ser objeto de ataques o detenciones debido a las medidas de vigilancia tecnológica que violan sus derechos humanos básicos. Las encuestadas también compartieron historias de familiares o amigos que fueron detenidos por el simple hecho de expresar una opinión política en un post de Facebook.

Paradójicamente, la vigilancia israelí de Internet y sus avances tecnológicos también han hecho visibles, a nivel internacional y con una rapidez asombrosa, la violencia cotidiana de las fuerzas israelíes y las estrategias diarias de adaptación de los palestinos. Esto, a su vez, ha contribuido a amplificar las voces y subrayar las luchas diarias de los palestinos que utilizan las plataformas de los medios sociales como sitios de "resistencia electrónica" (Shalhoub-Kevorkian, 2012; Aouragh, 2008). Las encuestadas hablaron de estrategias de

resistencia en línea, como compartir información actualizada sobre las invasiones del ejército israelí, conectarse con miembros de la familia que no pueden verse físicamente y asistir a conferencias. También hablaron con cariño de cómo los jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes, en Jerusalén utilizan los medios sociales para informar a todas horas para llamar la atención sobre la expulsión de los palestinos del barrio de Jerusalén. A pesar de los escollos siempre presentes en las redes sociales, éstas ofrecen un espacio para resistir los sistemas de vigilancia y las estructuras de poder coloniales. Como dijo Muna al-Kura, activista jerosolimitana de 23 años, "no podemos callar ante la opresión... Vivimos en una nueva era en la que los palestinos pueden hacerse oír, a pesar de los obstáculos y los intentos de silenciarnos".

Referencias

Aouragh. M., (2008). 'Everyday Resistance on the Internet: The Palestinian Context', *Journal of Arab and Muslim Media Research*, 1, pp. 109-30.

Griffiths. M., and Repo. J., (2021). 'Women and checkpoints in Palestine', *Security Dialogue*, 52(3), pp. 249–265, DOI. [online]

Griffiths. M., and Repo. J., (2020). *'Women's lives beyond the checkpoint in Palestine'*. Antipode. Publicación electrónica previa a la impresa el 6 de Abril de 2020. [online]

Hammami. R., (2015). 'On (Not) Suffering at the Checkpoint: Palestinian Narrative Strategies of Surviving Israel's Carceral Geography', *Borderlands* 14(1), pp. 1–17.

Nashif. N., and Fatafta. M., (2017). 'Surveillance of Palestinians and the Fight for Digital Rights'. *Alshabaka: Red de políticas palestinas.*

Peteet, J. (2017). *Space and Mobility in Palestine*. Bloomington: Indiana University Press.

Rijke. A., and Minca. C., (2018). *'Checkpoint 300: Precarious checkpoint geographies and rights/rites of passage in the occupied Palestinian Territories'*, Political Geography 65, pp. 35–45.

Shalhoub-kevorkian. N., (2012). 'e-Resistance and Technological In-security in Everyday Life: The Palestinian Case'. *The British Journal of Criminology*, 52(1), pp. 55–72. [online]

Weitzberg. K., (2021). 'Biometrics and Counter-Terrorism: Case study of Israel/Palestine'. *Privacy International.*

Zureik. E., (2011). *'Colonialism, Surveillance, and Population Control'*, in Zureik E, Lyon D and Abu-Laban Y (eds) *Surveillance and Control in Israel/Palestine: Population, Territory and Power*. Londres: Routledge, pp. 3–46.

Kholoud Al-Ajarma

Kholoud Al-Ajarma es antropóloga palestina y profesora del mundo musulmán globalizado en la Universidad de Edimburgo. Tiene un Doctorado en Antropología y Estudios Comparados de la religión. Máster en antropología del Desarrollo y un Máster en Estudios de la Paz y Resolución de Conflictos. Ha trabajado en el campo de los estudios sobre refugiados, el género, de las juventudes, la migración, los derechos humanos y la justicia medioambiental en varios países de la región mediterránea. Es una reconocida fotógrafa y directora de cine con trayectoria en la dirección de proyectos artísticos y mediáticos entre las comunidades de refugiados de Palestina.

SUJETOS DE DATOS EN LA MATRIZ DE FEMTECH: Un análisis de economía política feminista del mercado mundial de Menstruapps

por Nandini Chami y R. Vaishno Bharati

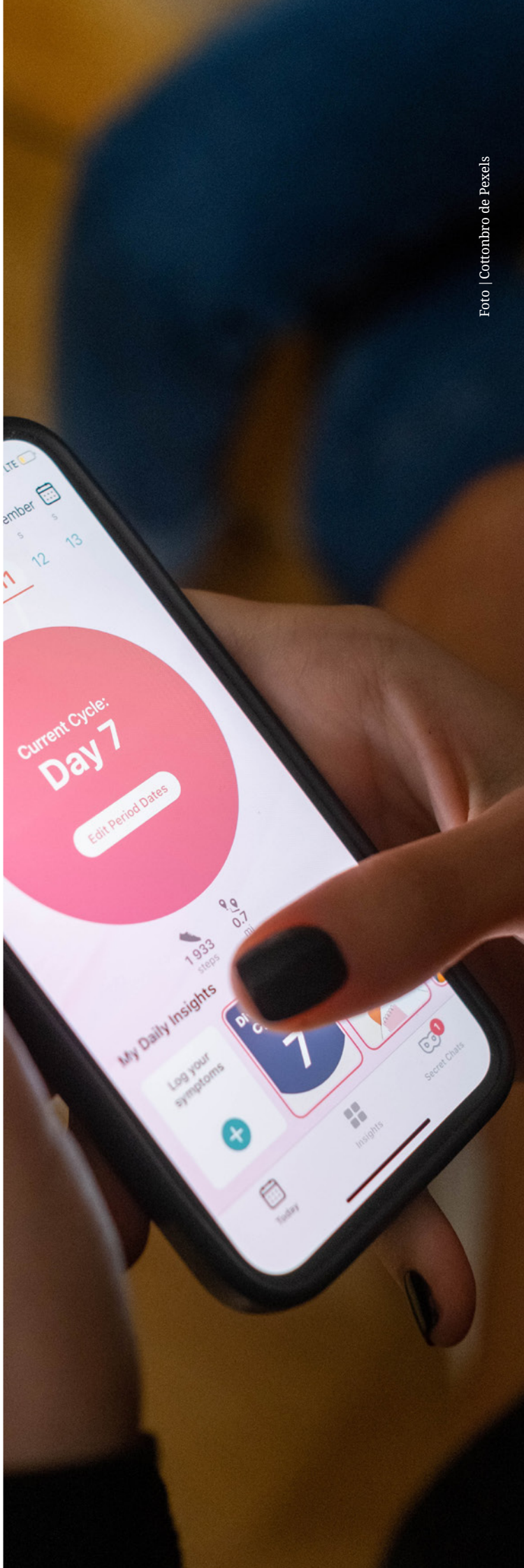


Foto | Cottonbro de Pexels

Las aplicaciones para la menstruación[1] constituyen más del 50% del floreciente mercado mundial de la tecnología femenina, cuyo valor se estima en 60.000 millones de dólares para 2027[2]. Entre 2020 y 2021, IT for Change llevó a cabo un estudio de investigación para examinar las implicaciones del mercado global de menstruapps para la privacidad y la soberanía de los datos de las usuarias de las aplicaciones, en particular las ubicadas en el Sur Global, desde un punto de vista de la economía política feminista. A través de entrevistas cualitativas con nueve activistas de los derechos digitales y dos desarrolladoras de tecnología de código abierto, y una revisión legal de las políticas de privacidad de cuatro populares aplicaciones menstruales en el Sur Global - Clue, Flo, MyFLO y Period Tracker - esta exploración se hizo con dos preguntas principales:

> **(a) ¿Cómo abordan las aplicaciones menstruales del mercado de la tecnología femenina la privacidad (en la recopilación, el procesamiento y el intercambio de datos personales con terceros)?**
>
> **(b) ¿Qué sugieren las prácticas de datos de las aplicaciones menstruales dominantes sobre la soberanía de los datos? ¿Cuáles son las implicaciones particulares para las usuarias del Sur Global?**

Nuestra investigación demostró que la asimilación de los cuerpos de género en el capitalismo de la vigilancia invade lo íntimo y viola los derechos humanos fundamentales. Las políticas y prácticas de privacidad de las aplicaciones menstruales

tienden a ser vagas, ineficaces y similares a un contrato entre “un león y una oveja”, ya que las usuarias se ven impotentes ante el inmenso biopoder que ejercen las aplicaciones menstruales[3].

Representando un escenario de extractivismo de datos sin límites, las cláusulas de consentimiento excesivamente amplias de estas aplicaciones carecen de limitaciones de propósito en el uso de datos en acuerdos de intercambio de datos con terceros, así como de garantías de procedimiento para los derechos de acceso, eliminación y portabilidad del sujeto de los datos[4]. A pesar del riesgo directo de que se produzcan resultados no deseados a causa de los avisos inadecuados[5], la letra pequeña de sus condiciones de servicio revela que las populares aplicaciones menstruales evitan toda responsabilidad por los daños individuales y colectivos derivados de la implacable elaboración de perfiles de usuario. La falta de responsabilidad por parte de los propietarios de las aplicaciones supone una doble carga para las usuarias del Sur. En primer lugar, la mayoría de los gobiernos del Sur Global no han promulgado leyes para proteger a las usuarias de los efectos nocivos de la elaboración de perfiles de comportamiento por parte de las empresas digitales transnacionales. En segundo lugar, aunque existan leyes para la protección de los datos personales, el flujo de facto de los datos desde los países del Sur hacia los recintos de las empresas del Norte socava la justiciabilidad de los derechos de las usuarias en caso de abuso.

En el modelo de negocio de las menstruapps, los datos agregados y anónimos sobre los cuerpos que menstrúan son económicamente valiosos precisamente porque representan un conocimiento abstracto sobre experiencias específicas y encarnadas de sexualidad y salud reproductiva. Sin embargo, sería un grave error asumir que sólo porque los datos han sido despojados de identificadores personales y agregados, pueden ser gobernados como un recurso puramente económico. Por el contrario, los datos son siempre sociales y nuestras identidades encarnadas están siempre implicadas en su recogida, agregación y procesamiento.[6]

Por lo tanto, cualquier intento de recuperar la soberanía de los datos en la matriz de las tecnologías de la información y la comunicación sólo puede tener éxito si dicha soberanía se plantea no sólo en términos de los derechos individuales de los sujetos de los datos sobre la recopilación, el intercambio y los usos potenciales de sus datos personales, sino también como la protección de la política social del cuerpo de los datos, que representa nuestros cuerpos, mundos de vida y socialidades, frente a la instrumentalización para la lógica extractiva de la acumulación de capital de datos.

Partiendo de este punto, esta investigación subraya algunas direcciones estratégicas críticas para la elaboración de un nuevo enfoque feminista de la soberanía de datos a través de nuevos trabajos teóricos y políticos:

(1) Establecer los límites de la alienabilidad de los datos para evitar que el capitalismo de la vigilancia invada nuestra autonomía corporal. En el caso de las menstruapps, no debe permitirse el funcionamiento de modelos de negocio que perfilan información sensible e íntima sobre la sexualidad y la salud reproductiva para estudios de mercado posteriores. Debe introducirse una legislación sectorial que garantice que los proveedores de menstruapps sean responsables de su propia recopilación de datos, de las prácticas de intercambio de datos de terceros y de la exactitud de los avisos de información que proporcionan. La impugnación de la impunidad de los gigantes digitales (en el sector de las menstruapps y en otros) por las prácticas comerciales que violan los derechos debe ser adoptada urgentemente como una importante agenda feminista.

(2) Desarrollar un régimen de gobernanza de los datos que no sólo defienda el derecho de los individuos sobre sus datos personales, sino que también aproveche los datos como un conocimiento social común para el valor y el beneficio públicos. En el caso de las menstruapps, y más ampliamente de la femtech, esto requiere una evaluación de las formas en que el recurso social de los datos agregados y anónimos sobre las necesidades y el comportamiento de la salud sexual y reproductiva puede ser desplegado para permitir a la comunidad de usuarias, y de hecho a las no usuarias, obtener un valor colectivo y una visión compartida, con la garantía de la privacidad, la dignidad y la autonomía.

(3) Forjar un nuevo constitucionalismo global para la gobernanza de los datos, basado en una visión indivisible e integrada de los derechos de los datos que reconozca la soberanía de las personas sobre sus recursos de datos como parte integral de su autonomía personal, junto con el derecho al Desarrollo. Esto sólo es posible a través de una revisión completa del régimen global de propiedad intelectual (PI), haciendo el cambio del archivo de los datos y las innovaciones de la inteligencia artificial (IA) al desarrollo de los bienes públicos de los datos como una infraestructura común que no puede ser cooptada por las poderosas empresas de Big Tech.

[Este artículo resume las ideas clave del estudio de investigación de IT for Change sobre las implicaciones del mercado global de menstruapps para la privacidad y la soberanía de los datos de las usuarias de las aplicaciones, especialmente las del Sur. El informe de investigación completo puede consultarse en Chami. N., Bharati. R. V., Mittal. A., y Aggarwal. A., (2021). Data Subjects in the Femtech Matrix: A Feminist Political Economy Analysis of the Global Menstruapps Market. IT for Change.]

Notas finales

1- Aplicaciones móviles que rastrean el ciclo reproductivo, la vida sexual y la salud menstrual de una usuaria para proporcionar información derivada de algoritmos sobre su cuerpo.

2- Stewart, C. (2021). 'Worldwide femtech market size 2027'. [online] [Consultado el 1 de Diciembre de 2021]

3- Privacy International (2020b). 'We asked five menstruation apps for our data and here is what we found....'. [online] [Consultado el 20 de julio de 2021]; Felizi, N., and Varon, J. (2016). 'MENSTRUAPPS - How to turn your period into money (for others)'. [online] [Consultado el 07 de Julio de 2021].

4- Los resultados también están confirmados por Shipp, L. And Blasco, J. (2020). 'How private is your period?: A systematic analysis of menstrual app privacy policies', Proceedings on Privacy Enhancing Technologies, 2020(4), pp. 491-510. doi: [online]

5- Véase Hunt, K. (2020). 'Fertility apps can be 'misleading' for women, review finds', CNN, Abril 07. [online] [consultado el 6 de Diciembre de 2021].

6- Gurumurthy, A., Chami, N. (2021). 'Beyond data bodies: New directions for a feminist theory of data sovereignty', Data Governance Network Working Paper 24. [pdf]

Nandini Chami

Nandini Chami es Directora adjunta de IT for Change, una organización con sede en Bangalore (India), con estatus consultivo consultivo especial en el ECOSOC. Su trabajo se centra principalmente en la investigación y la promoción de políticas en los ámbitos de los derechos digitales y la economía política de los derechos de las mujeres en la sociedad de la información. Se concentra en acciones de advocacy en torno a la agenda de desarrollo 2030 en relación con los datos, las tecnologías digitales y la justicia de género.

R. Vaishno Bharati

Vaishno Bharati es Asociada en IT for Change, una organización con sede en Bangalore (India), con estatus consultivo especial con el ECOSOC. Su trabajo se centra en los aspectos programáticos de la revista online Bot Populi. También contribuye a la investigación y promoción de proyectos nacionales e internacionales de la organización y escribe con frecuencia para Bot Populi.

Foto | Mat Napo de Pexels

PASAPORTES DE VACUNACIÓN: *¿Una situación complicada?*

por Sai Jyothirmai Racherla

La Organización Mundial de la Salud (OMS), al 10 de diciembre de 2021, informó de 267,86 millones de casos confirmados de Covid-19 en todo el mundo, incluidos 5,28 millones de muertes. Hasta el 8 de diciembre de 2021, se habían administrado un total de 8.150 millones de dosis de vacunas en todo el mundo (WHO Covid-19 Dashboard, 2021). Sin embargo, un examen más profundo de las tasas de vacunación en los países del Sur y del Norte muestra un acceso desigual no solo entre los países sino también dentro de ellos, lo que socava la equidad y va en contra del mantra de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas de "no dejar a nadie atrás". Dado que las nuevas variantes emergentes, como Omicron, IHU, Deltacron y Flurona, plantean nuevos retos, el acceso universal a las vacunas contra la Covid-19, tanto a la serie primaria como a las dosis de refuerzo, junto con otras medidas de salud pública para contener la pandemia, es más urgente que nunca.

El programa de Acceso Global a las Vacunas Covid-19 (o COVAX), codirigido por la OMS y creado para salvar la brecha de las vacunas, ha fracasado en su promesa de vacunar equitativamente al mundo. Con sólo el 5% de las vacunas requeridas administradas en todo el mundo, COVAX ha incumplido su objetivo de 2.000 millones de vacunas para 2021((La Oficina de Periodismo de Investigación, 2021). Esto ocurre después de que el objetivo fuera revisado a la baja a sólo 800 millones de dosis debido a la escasez de suministros y a problemas logísticos.

En este contexto de un mundo desigual en el que los países tienen una situación epidemiológica y de cobertura de vacunación muy variada, la exigencia de pasaportes de vacunación para volver gradualmente a la llamada normalidad presenta otro escollo. Los

pasaportes de vacunación son certificados de vacunación que acreditan que una persona ha sido vacunada contra Covid-19. Accesibles electrónicamente en aplicaciones para teléfonos móviles o como documentos impresos, su objetivo es reducir las restricciones de salud pública para sus portadores, principalmente facilitando las restricciones para viajar y, en los últimos tiempos, para las actividades cotidianas, incluso en el lugar de trabajo.

Según una encuesta global de Ipsos realizada para el Foro Económico Mundial en 2021 en veintiocho países, tres de cada cuatro encuestados estaban de acuerdo en que los pasaportes con vacuna deberían ser obligatorios para los viajeros que entran en sus fronteras. Sin embargo, cuando se les preguntó acerca de las preocupaciones sobre la privacidad, sólo la mitad de los encuestados se sentían cómodos con que los gobiernos pudieran acceder a su información sanitaria y sólo el 40% estaba de acuerdo con que las empresas privadas accedieran a sus datos sanitarios y registros personales (Encuesta de Ipsos para el Foro Económico Mundial, 2021). Estas y otras consideraciones sugieren que los pasaportes de vacunas deben abordarse con precaución y cuidado, teniendo en cuenta la desigualdad de acceso en el Sur Global.

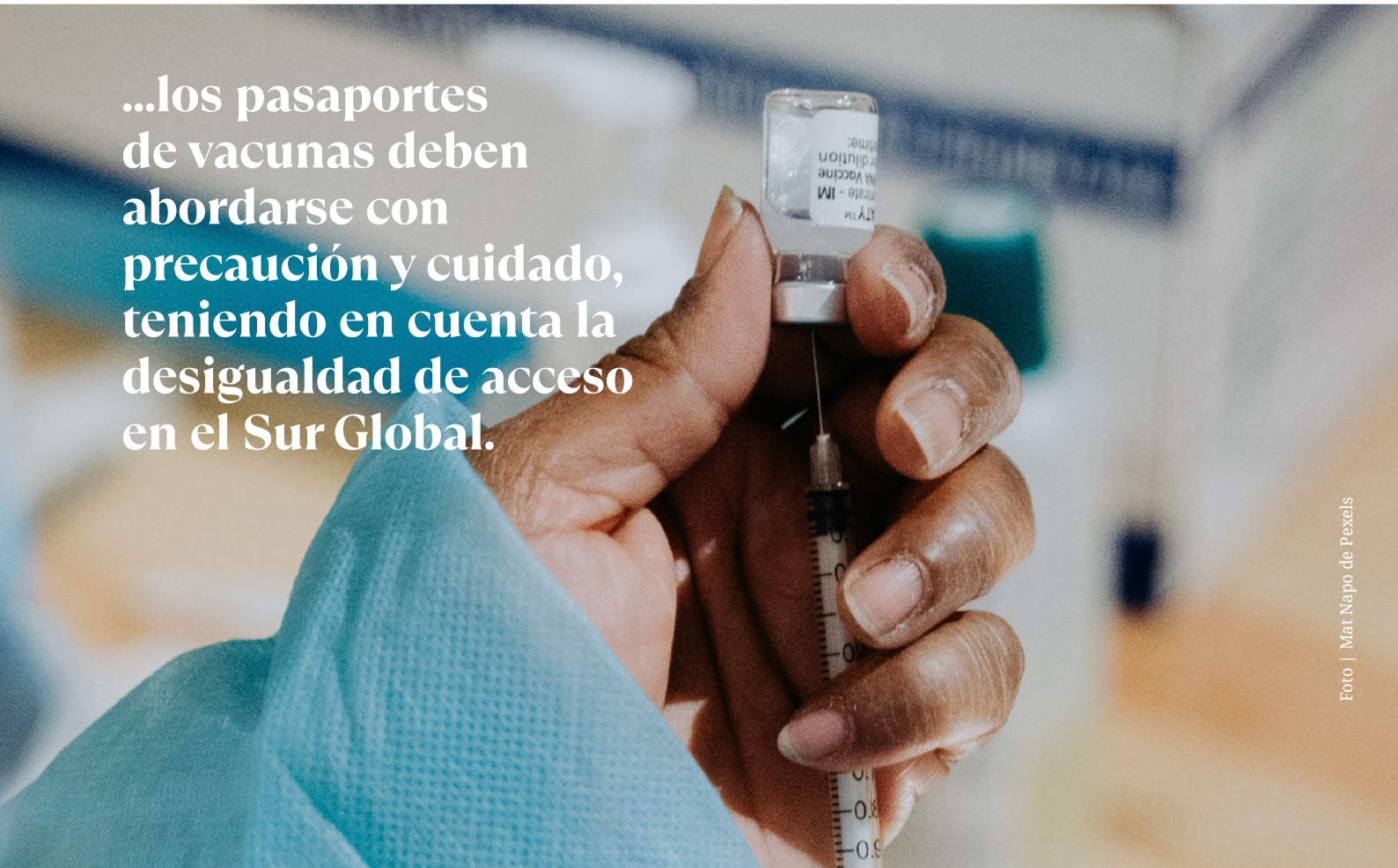


Foto | Mat Napo de Pexels

¿Estamos ya preparados para los pasaportes de vacunación?

Con al menos trece vacunas diferentes que se administran en todo el mundo después de solicitar la Lista de Uso de Emergencia (LUE) de la OMS, solo el 41,5% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna Covid-19 en septiembre de 2021. En el caso de los países de bajos ingresos, la cifra correspondiente es de apenas un 1,9%. La equidad en la distribución de las vacunas sigue siendo una cuestión persistente en las previsiones realizadas hasta diciembre de 2021, que sitúan a los países de renta baja y media (PRMB) y a los de renta baja en el último peldaño del acceso a las vacunas. Las barreras estructurales, como la debilidad de los sistemas sanitarios, la imposibilidad de recibir las vacunas a través de sistemas de cadena ultrafría, la falta de capacidades adecuadas de almacenamiento y transporte, la capacidad limitada de los centros de vacunación y los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) siguen dificultando el acceso a las vacunas en los PRMB y los países de renta baja.

Con estas grandes desigualdades en juego, los pasaportes de vacunación exacerban aún más las desigualdades al proporcionar libertad de movimiento sólo a los pocos privilegiados que pueden vacunarse, discriminando a quienes no tienen vacunas. Ni qué decir tiene que la carga de esta restricción la soportan de forma desproporcionada las personas de comunidades ya marginadas y vulnerables de los países del Sur Global.

¿Pasaportes de vacunación para quienes quedan atrás?

Los trabajadores y las trabajadoras migrantes son un ejemplo de ello. A pesar de las malas condiciones de vida en la mayoría de los países de destino y de que corren un mayor riesgo de contraer infecciones, no se ha dado prioridad a las trabajadoras y los trabajadores migrantes en los esfuerzos de vacunación. En la actualidad, países y territorios como Hong Kong, Taiwán, Nueva Zelanda, Australia, Malasia y Tailandia tienen un conjunto de planes o directrices diferentes en lo que respecta a la vacunación de los trabajadores y las trabajadoras migrantes, cada uno con sus propios retos y oportunidades. En Hong Kong, por ejemplo, la información sobre la vacunación de los trabajadores y las trabajadoras migrantes no está disponible o es inaccesible, mientras que en Taiwán, los planes de vacunación no dan prioridad a las trabajadoras y los

trabajadores migrantes indocumentados (Foro en línea sobre las vacunas COVID y la inclusión de migrantes, 2021).

Las mujeres, en particular, siguen siendo dejadas atrás. En la India, las mujeres han recibido tan sólo el 35% de las vacunas (PRESS, 2021). Los jóvenes, que son los últimos en la cola de vacunación, las personas con discapacidades y los grupos excluidos digitalmente o con poco acceso a la tecnología, se enfrentan a desafíos a la hora de solicitar la vacunación y, por tanto, los pasaportes de vacunación.

Además, los países del Norte Global tienen aprobaciones preferentes para ciertas vacunas. Esto significa que no basta con tener una vacuna aprobada por la OMS, sino que tiene que ser la "vacuna elegida, administrada en lugares elegidos". El Reino Unido, los 27 miembros de la Unión Europea y los 26 países del Espacio Schengen sólo aceptan cuatro vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson (New York Times, 2021). También se han documentado casos en los que los pasaportes de las vacunas dependen del país en el que se haya vacunado la persona.

¿Pasaportes de vacunación, privacidad y protección de datos?

Técnicamente, los datos de los pasaportes de vacunación deberían utilizarse exclusivamente para la verificación de las vacunas y no compartirse fuera del ámbito de la salud pública y la seguridad, especialmente sin el consentimiento de las comunidades. Pero las violaciones de las garantías de privacidad no son inéditas. Un ejemplo es el acceso a los datos de Covid-19 por parte del departamento de policía de Singapur a principios de este año con fines de investigación criminal, lo que supone una violación de los derechos de privacidad (BBC NewsIllmer, 2021). Con la tecnología de los pasaportes digitales de vacunación, en la que participan muchas partes interesadas, incluidas las entidades privadas, están en juego la protección de datos, la privacidad y la confidencialidad de los datos personales de las personas.

Hasta que logremos el acceso universal a la vacuna Covid-19, el sistema de pasaporte de vacunación debe aplicarse con excepciones y flexibilidad como una de las muchas disposiciones inclusivas para facilitar los viajes y otras restricciones de movilidad, manteniendo la salud pública en el centro de la toma de decisiones. Los pasaportes de

vacunación interoperables, SMART, de baja tecnología, accesibles y basados en soluciones digitales pueden desarrollarse una vez que todas las personas tengan acceso a la vacuna. Hasta ese momento, el sistema de pasaportes de vacunación, si se implementa, debe defender la salud, el bienestar, la dignidad, la privacidad y la confidencialidad de los datos, la libertad de movilidad y de asociación, y la defensa de los derechos de salud para todas las personas, con información en la evidencia.

Referencias

Associated Press, (2021). 'Inequality: Women Globally Often Missed on COVID-19 Vaccines', Daily Sabah, consultado el 26 de Octubre de 2021. [online]

Furneaux. R., Goldhill. O., y Davies. M., (2021). 'How COVAX Failed on its Promise to Vaccinate the World', The Bureau of Investigative Journalism, consultado el 26 de Octubre de 2022. [online]

Ipsos, (2021). 'Global Views on Personal Health Data and Vaccine Passports: Ipsos Survey for The World Economic Forum', Abril de 2021. [online]

Yeginsu. C., (2021). 'As International Travel Returns, Confusion Over Vaccines Reigns' 03 de noviembre de 2021, consultado el 26 de octubre de 2021, New York Times. [online]

'WHO Covid-19 Dashboard, (2021). Organización Mundial de la Salud. [online]

'Online Forum on COVID Vaccines and Inclusion of Migrants', (2021). Misión de Asia y el Pacífico para los Migrantes. [online]

Sai Jyothirmai Racherla

Sai Jyothirmai Racherla (Sai) es la Directora Ejecutiva Adjunta del Centro de Recursos e Investigación para la Mujer de Asia y el Pacífico (ARROW), una organización regional de mujeres con sede en Kuala Lumpur, con estatus consultivo especial en el ECOSOC. Ha trabajado durante los últimos 20 años en investigación, seguimiento y promoción en el ámbito de la salud y los derechos de la mujer, en particular la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SRHR). Es coautora de los informes de seguimiento regional de la CIPD ARROW para la CIPD+10, +15, +20 y +25. Ha participado activamente en la construcción del movimiento juvenil para los ODS en la región y ha participado activamente como representante de ARROW, junto con otros convocantes, en el desarrollo de un espacio para el discurso de los jóvenes a través de los Foros de la Juventud de la AFFSD, que se celebran cada año antes del Foro Intergubernamental de la APFSD.Tiene un Máster en Alimentación y Nutrición y un Diploma Avanzado en Estudios de Población y Metodología de la Metodología.

Descarga aquí las ediciones previas de DAWN Informa

DAWN Informa
© 2020 DAWN bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

ÚNETE A NOSOTRAS EN LÍNEA

Este Documento de Discusión ha sido traducido por DeepL con revisiones realizadas por DAWN.

Tenga en cuenta el medio ambiente: no imprima esto si puede evitarlo.

PUBLICADO EN MARZO DE 2022

EQUIPO DE EDICIÓN
Flora Partenio
Sala Weleilakeba
Sharan Sindhu
Damien Gock
Sohel Sarkar (Corrección de Estilo)

COMITÉ EJECUTIVO
Cai Yiping
Corina Rodríguez Enríquez
Florencia Partenio
Gita Sen
(Co-coordinatora General)
Kumudini Samuel
María Graciela Cuervo
(Co-coordinatora General)
Masaya Llavaneras Blanco
Vanita Mukherjee

MIEMBRAS DE LA JUNTA
Celita Eccher
Claire Slatter
(Presidenta de la Junta Directiva)
Fatou Sow
Sandra Tarte
Sonia Corrêa
Tara Chetty
Viviene Taylor

SECRETARÍA GENERAL

Administradora
Sharan Sindhu

Oficial de Finanzas
Nailagovesi Vakatalai

Oficial de Comunicación
Ricardo D'Aguiar

Oficial de Investigación
Sala Weleilakeba

Oficial de Finanzas Junior
Simran Singh

Oficial de Comunicación Online
Tasmy Gómez

Asociado de Programas
Damien Gock

Asistente Administrativa y Financiera
Ana Rakacikaci

Diseñadora grafica
Marla Rabelo

Diseñadora grafica Junior
Raquel Cappelletto

Secretaría General, JP Bayly Trust Building, Level 2, 193 Rodwell Road, Suva, Fiji.

DAWN
FEMINIST

MUJERES POR UN DESARROLLO
ALTERNATIVO PARA UNA NUEVA ERA